

STEPS TOWARDS CONFLICT PREVENTION PROJECT

Alternativas Territoriales en el Conflicto Colombiano

Colombia

Junio -Julio de 2004

Liam Mahony
Luis Enrique Eguren

Este documento fue desarrollado como parte de un proyecto de aprendizaje cooperativo dirigido por CDA. Constituye parte de una colección de documentos que deberían considerarse resultados iniciales y parciales del proyecto. Estos documentos fueron redactados para permitir la identificación de asuntos y temas transversales a lo largo de un espectro de situaciones. Cada caso presenta los puntos de vista y las perspectivas de una variedad de personas en el momento en el cual fue escrito.

Estos documentos no representan el producto final del proyecto. A pesar de que estos documentos pueden ser citados, permanecen documentos en proceso de elaboración de un esfuerzo de aprendizaje cooperativo. No se pueden hacer grandes generalizaciones de los resultados del proyecto a partir de un sólo caso.

CDA desea reconocer la generosidad de los individuos y agencias participantes por la entrega de su tiempo, experiencia y discernimientos para estos informes, y por su disposición de compartir sus experiencias.

No todos los documentos de proyectos particulares han sido presentados de manera pública. Cuando las personas en una zona en la cual se ha hecho un informe nos solicitaron proteger su anonimato y seguridad, por respeto a ellas y a las comunidades involucradas, guardamos los documentos en confidencialidad.

Introducción

El presente estudio examinará varios experimentos conducidos por comunidades y organizaciones regionales y locales en diferentes sitios de Colombia con el intento de crear y defender "espacios alternativos" en contextos de conflictos armados profundamente arraigados que a su vez han sido abrumadores e insidiosos en cuanto al impacto producido en las comunidades civiles. El conflicto en Colombia existe desde hace más de 4 décadas y ha provocado un impacto destructivo en cada una de las regiones. Ello ha involucrado a las fuerzas militares que aún continúan profundamente afianzadas en el pensamiento contrainsurgente de la guerra fría respecto de la "seguridad nacional" de su acérrimo aliado – los Estados Unidos, así como numerosas organizaciones paramilitares aliadas, una docena de movimientos guerrilleros aproximadamente, y una veintena de iniciativas civiles sin violencia destinadas a crear alternativas viables para una vida en comunidad sostenible.

El contexto Colombiano brinda una variedad muy rica de experiencias relevantes para el proyecto STEPS. Durante nuestras entrevistas, el concepto STEPS fue rápidamente aceptado como la expresión del deseo y la lucha de muchos grupos que ya se encuentran profundamente y articuladamente involucrados. Nuestros encuestados a menudo mencionaron casos adicionales para estudio. -"También deben conocer a tal comunidad en Meta, el grupo regional de comunidades en Antioquia, este otro esfuerzo en Santander", y muchos más. La mayoría de tales otras experiencias no han recibido la clase de atención internacional que se generó por las "Comunidades de Paz" las que primero atrajeron la atención del proyecto. Con esta breve descripción de los esfuerzos comunitarios en Choco, Urabá y Cauca, esta investigación resulta superficial.

El proyecto STEPS con el presente análisis está entrando en un terreno que la esfera académica, y las instituciones de investigación activistas en Colombia también están tratando de analizar. No solo incluye un importante número de documentación, análisis y testimonios en español acerca de varias de estas experiencias, de la misma forma incluye análisis teóricos rigurosos de los conceptos y desafíos de defensa territorial civil en el contexto del conflicto Colombiano.¹ Asimismo, nos enteramos de varios estudios exhaustivos que se están desarrollando actualmente – que aún no han sido publicados - acerca de algunos de los casos que estamos estudiando, entre otros. Estos estudios, una vez disponibles, se basarán en estudios de campo más exhaustivos comparado con la presente investigación de STEPS, y complementarán el presente estudio de manera significativa.

La primera parte se focaliza en el departamento de Choco, en el extremo sudeste de Colombia que limita con el Océano Pacífico y Panamá. En términos geográficos e históricos se encuentra íntimamente relacionado con la región Urabá (entre Chocó y el Caribe) y se centrará en los esfuerzos de docenas de comunidades organizadas en dos organizaciones importantes: OREWA, que representa a las comunidades indígenas en Choco, y COCOMACIA que representa a todas las comunidades Afrocolombianas de la región del Medio Atrato en Chocó. Ambas organizaciones tienen sus sedes en la capital departamental –Quibdó, y han sido patrocinadas por y están asociadas con la Diócesis Católica de Quibdó.

La segunda parte examinará las *comunidades de paz* y las *comunidades en resistencia* más al norte, en la región del Bajo Atrato Chocoano y en la lindante región del Urabá Antioqueño.

Podemos ofrecer una discusión exhaustiva de un caso solamente: *San José de Apartadó en Urabá*, seguida de una discusión comparativa de varias otras experiencias de comunidades de paz en el área. Todas estas comunidades comparten la experiencia traumática de haber sido violentamente desplazadas de sus territorios durante las ofensivas militares/paramilitares a fines de los 90s y de haberse organizado conjuntamente para regresar a sus tierras mediante prudentes políticas y estrategias comunitarias destinadas a preservar las comunidades en el contexto actual.

La tercera parte se traslada al departamento andino de Cauca, uno de los departamentos con mayor cantidad de comunidades indígenas en Colombia. En Cauca, observaremos tanto las estrategias de las comunidades indígenas así como las estrategias de los campesinos no indígenas en el departamento con una admirable historia de movilización social y una auto percepción de ser un departamento diferente” y “alternativo” en Colombia, y que sin embargo viene sufriendo una acelerada invasión paramilitar durante 2000-2003.

En ambos departamentos estamos tratando con culturas étnicas específicas (indígenas y afrocolombianas) para quienes el conflicto actual es simplemente una pequeña parte de una lucha de décadas por la autonomía y la supervivencia ante la conquista, que transcurre paralelamente con una historia de asimilación indígena y afrocolombiana y una cooptación política y cultural de parte de las elites. Estas dinámicas se relatan y analizan en una importante cantidad de literatura de las disciplinas de antropología, estudios étnicos, estudios negros, estudios indígenas, sociología, historia latinoamericana y ciencias políticas, y un sinnúmero de teorías y análisis contrapuestos relacionados con las estrategias (y orígenes y logros de dichas estrategias) de comunidades indígenas y afroamericanas en todo el hemisferio. En este extenso trabajo los autores no son expertos, sin embargo reconocen su importancia para la realización de este estudio, y agradecerán comentarios adicionales de aquellas personas con mayor experiencia. Somos conscientes de que esta breve visión de las estrategias actuales, dado el número reducido de encuestados, es quizás limitada y vulnerable de error.

Agradecimientos

Debemos agradecer a varias personas por su asistencia con este estudio—por orientarnos y guiarnos en Colombia, y por aceptar ser entrevistados. Sin embargo por motivos relacionados con su propia seguridad, no vamos a mencionar los nombres de los individuos en este trabajo. Estamos profundamente agradecidos con las personas de todas las organizaciones a continuación: La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, tanto en Bogotá como en Cauca, las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) de Cacarica, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los miembros de la Comunidad de Jiguamiandó, los miembros de otras tantas comunidades del Bajo Atrato, los miembros del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Comisión Vida Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, así como a la Diócesis misma, la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), la Organización Regional Embera-Wounaan (OREWA), el Centro Cultural Mama’u en Quibdó, la Asociación Comunal La Vega (Cauca), la Asociación Comunal de Sucre, la Asociación Comunal de Caldon, las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la Coordinadora Integral del Macizo Colombia (CIMA), la Coordinadora Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Nacional de Usuarios del Agro (Fensuagro), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), las Cooperativas del Sur del Cauca (CoSurCa), y el Proyecto de Paz Brigadas Internacional de Colombia. Asimismo

estamos agradecidos por los recursos y el asesoramiento brindado por los consejeros de la Universidad Javeriana y la Universidad del Cauca.

Esperamos con ansias el día en el que mencionar las fuentes de información en Colombia no se coloque a ninguna persona en situación de riesgo y que podamos agradecerles su apoyo públicamente como se merecen.

Antecedentes Políticos

Actualmente Colombia es el país que registra la peor y más duradera situación de conflicto y abuso de derechos humanos en el hemisferio occidental, con cientos de asesinatos políticos y docenas de masacre anualmente y, literalmente, cientos de miles de nuevos desplazados internos o IDPs cada año. La guerra recrudece y las estadísticas empeoran año tras año. No hay negociaciones coherentes a la vista, y escasas pruebas de esperanza de una solución para terminar con la violencia a mediano plazo. Por el contrario, la política explícita del actual presidente de Colombia es intensificar la guerra, y cuenta con el amplio apoyo internacional de los Estados Unidos así como de Europa. (Para obtener información explícita acerca del Conflicto de Colombia y las situaciones de derechos humanos, consulte los anexos 1 y 2).

La guerra actual representa un importante punto de destrucción en un ciclo repetido de guerra civil y represión que viene aconteciendo desde al menos 1948, el comienzo del conocido período llamado La Violencia, durante el cual la lucha guerrillera conducida por las Elites Liberales y Conservadoras cobró la vida de más de 200.000 personas. La Violencia terminó oficialmente con un “acuerdo” en 1958 por medio del cual los mismos partidos de elites acordaron compartir el poder mediante un control alternado del gobierno “electo”.

Este acuerdo fue solo una demostración del problema endémico de *exclusión* en la política y el gobierno colombiano. Colombia alega ser una de las democracias más estables en toda Latinoamérica – con pocos de los episodios históricos vergonzantes de golpes de estado y dictaduras frecuentes entre la mayoría de sus vecinos. Sin embargo, ha sido una democracia parcial a lo sumo, que nunca representó a la clase trabajadora o pobres de las zonas rurales. El gobierno en Colombia raramente se ha extendido más allá de las ciudades y pueblos más importantes, mientras que los campesinos rurales se encuentran continuamente sujetos a un gobierno por la fuerza.

Las zonas rurales de Colombia han sido testigo de los procesos que se mencionan a continuación en forma repetida una y otra vez: ante conflictos acerca del territorio, la estrategia de elite es la expropiación y el desplazamiento mediante el uso de la fuerza, en connivencia con las fuerzas militares y/o irregulares, y estableciendo el control social por parte de las elites. Entonces se permite que los campesinos pobres colonicen nuevos territorios fronterizos, y luego de que éstos han desarrollado e incrementado el valor de dichos territorios, las elites aparecen nuevamente y toman control de las propiedades más extensas consolidadas - ya sea mediante la compra de las tierras de los campesinos imposibilitados de pagar los créditos que adeudan, o nuevamente expulsándolos por la fuerza. Entretanto, en las áreas de extracción de recursos (aceite, esmeraldas, madera, etc.), el procedimiento normal ha consistido en el ingreso de las fuerza externas con inversiones rápidas a corto plazo para extraer la riqueza de las zonas fronterizas velozmente, sin una inversión actual en la región o en su gente.

En este proceso de colonización repetida, los campesinos rurales han sido desplazados continuamente de sus tierras mediante el uso de la fuerza, mucho antes de la ola masiva actual de tales desplazamientos en manos de las paramilitares y de la guerrilla. Las guerras de Colombia, históricamente y hasta la fecha, han estado siempre relacionadas con los bienes raíces. La Violencia, a menudo descripta simplísticamente como una contienda enloquecida entre dos partidos políticos, no ha sido diferente. Ha dejado a miles de campesinos sin tierra, ya que los oportunistas utilizaron la violencia para establecer feudos locales. En respuesta al ataque, los campesinos en muchas oportunidades se agruparon en milicias de defensa propia armadas para resguardarse a ellos mismos y a sus tierras. La guerrilla, actualmente conocida como la FARC (Fuerzas Armadas Rebeldes de Colombia) se inició durante *La Violencia* como una de tales milicias de defensa personal, compuesta por campesinos pobres – no comunistas, sino por miembros del partido Liberal.

El acuerdo de Liberales y Conservadores en 1958 no hizo nada por estos campesinos rurales. Las elites dejaron de atacarse entre sí, sin embargo los pobres fueron excluidos y siguen siendo gobernados por la fuerza. Muchos grupos de auto-defensa no encontraron motivación racional para deponer las armas, y por lo tanto la guerra de la guerrilla moderna de Colombia ya estaba en proceso cuando se declaró la finalización de *La Violencia*. Las elites y militares colombianos, con el respaldo constante por parte de los Estados Unidos, mantuvieron las operaciones de "contrainsurgencia" en curso que incluyen el etiquetamiento de activistas sociales civiles con asesinatos selectivos, desapariciones y amenazas, y el uso de una variedad de organizaciones paramilitares a través de los años.

La estrategia paramilitar ha llegado a dominar el panorama en Colombia, pero esto no es nuevo. El uso de fuerzas secretas o "irregulares" para llevar a cabo operaciones de guerra sucia, en combinación con una trama política y de propaganda para evitar la contabilidad por parte del estado, fue una estrategia de contrainsurgencia comprobada y ampliamente documentada, utilizada por la mayoría sino por todos los militares latinoamericanos y en momentos explícitamente recomendada por los asesores y entrenadores estadounidenses a lo largo del periodo de "Guerra Fría" de los regimenes de terrorismo de estado de Latinoamérica.

Con el paso del tiempo, la FARC creció al punto de operar en todo el territorio nacional. Adoptó la ideología comunista en los 60, y desarrolló una estructura militar estricta, una reputación por sus tácticas militares efectivas, y una resistencia evasiva. Entre tanto surgieron muchos otros movimientos guerrilleros, todos dentro del mismo entorno de exclusión popular del control de la política, la economía, o la tierra. Con el paso del tiempo, muchos de estos otros grupos eventualmente se involucraron en negociaciones con el gobierno y se desmovilizaron. Asimismo, la FARC inició negociaciones en los 80s, y uno de los resultados fue la creación de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda. Posteriormente, los miembros de la FARC desmovilizados así como los activistas civiles de la Unión Patriótica (solamente algunos de los cuales eran combatientes anteriormente) fueron exterminados sistemáticamente por las miles campañas militares-paramilitares a comienzos de los 90s, lógicamente colocando a la FARC en una posición altamente sospechosa de cualquier negociación futura.

Actualmente, las dos organizaciones guerrilleras más importantes en Colombia son la FARC con un estimado de 15.000 combatientes, y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) con un estimado de 5.000 combatientes (estas cifras varían ampliamente). Las organizaciones guerrilleras más significativas de Colombia han basado sus operaciones principalmente a través de diferentes formas de lo que ellos llaman “tributación” de las elites económicas locales. El secuestro o la amenaza de secuestro, especialmente de terratenientes, se volvió una fuente lucrativa de ingresos de extorsión. La exigencia de “dinero de protección” o de un porcentaje de los ingresos de empresas locales fue otra fuente lucrativa (con la amenaza de violencia o secuestro implícita para respaldar dicha exigencia). Como la industria de la droga expandió sus operaciones en las áreas rurales en los años 70s y los 80s, también se volvió un objetivo lógico para las guerrillas, que consideraron esta industria como otra versión rentable de la elite capitalista a expensas de los carenciados rurales. La industria de la droga, enfrentando un número creciente de secuestros y extorsiones por parte de las guerrillas, se convirtió en uno de los partidarios principales de la estrategia paramilitar.

El vínculo con los carteles de droga militar-paramilitar aumentó significativamente en los 80s. El secuestro de dos niños del cartel de Medellín provocó una coalición de magnates de las drogas, terratenientes y militares para colaborar en la formación y fortalecimiento de una nueva y amplia organización paramilitar MAS (“Muerte a Secuestradores”). MAS cruelmente eliminó no solo a las guerrillas sospechadas de los grupos involucrados en secuestros, sino que también a cientos de activistas sociales civiles etiquetados como guerrilla que simpatizaban con la ideología del estado anticomunista predominante. La violencia asesina de MAS continuó por años, y fue interpretada por los militares como un esfuerzo de contrainsurgencia extremadamente exitoso, causando un rápido incremento del compromiso de los militares con la estrategia paramilitar. MAS llevó a cabo otras operaciones paramilitares, y una red ampliamente extendida de dichos grupos opera hoy en día bajo la actual organización AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El estrecho vínculo financiero con la industria de la droga se ha incrementado ^{fn}, y las alianzas estratégicas con el ejército continúan del mismo modo.

Antes de mediados de los 90s, las estadísticas muestran que uno de los mayores abusadores de derecho humanos en Colombia fue consistentemente el ejército. Bajo una creciente presión internacional respecto de los derechos humanos, y del mismo modo bajo una combinación de presión respecto de derechos humanos y control de drogas por parte de los Estados Unidos, en 1990 Colombia necesitaba limpiar su imagen, y decidió “paramilitarizar” crecientemente su guerra. Se registró una disminución fenomenal respecto de los abusos atribuidos al ejército desde 1997-8, y un correspondiente y aún mayor aumento de tales abusos por parte de las fuerzas paramilitares. A diario se revelan nuevas pruebas de connivencia entre el ejército y los paramilitares.

Actualmente, un estimado de 13.000 paramilitares están representados por la organización paraguas AUC liderada por Carlos Castaño. ⁴ Castaño ha sido un líder paramilitar activo desde el período del MAS. Se reconoce universalmente que las AUC son responsables de haber cometido las mayores atrocidades en Colombia, atrocidades que el mismo Castaño admite (alegando que son un mal necesario en la lucha contra las guerrillas). Tanto él como sus colegas han sido acusados en numerosas oportunidades, a nivel nacional e internacional, por haber cometido

asesinatos y otros abusos a los derechos humanos, así como también por estar relacionados con el narcotráfico. Aún a pesar de una descarada presencia “pública” en el país, nunca es arrestado.

En términos de propaganda, el gobierno Colombiano ha mantenido un impresionante discurso Goebbel-esque instalando dudas en la comunidad internacional acerca de la naturaleza de los paramilitares, manteniendo debates con respecto a su autonomía lo que sería absurdo y sus consecuencias menos espantosas. No nos dedicaremos a tales debates aquí.⁵ Los paramilitares son fuerzas con sus propios liderazgos, liderazgos con intereses personales en busca de poder como tantas otras, y que poseen sus propias motivaciones y ambiciones, y su propia estructura de mando semi-autónoma. *Sin embargo los paramilitares son una estrategia del estado Colombiano, su ejército y las elites económicas tradicionales.* El ejército los respalda, los dirige y los provee de inteligencia, alojamiento, transporte y se asegura de advertirles siempre que un fiscal entusiasta considera la posibilidad de arrestar a alguno de ellos.

Los paramilitares están actualmente involucrados en una ”negociación” extremadamente controvertida, supuestamente con el objetivo de desmovilización. Muchos activistas de derechos humanos Colombianos critican duramente estas negociaciones considerándolas una farsa (el estado negociando con si mismo) que solamente aleja al estado de su responsabilidad. Muy recientemente, aún algunos líderes del ejército se opusieron a las negociaciones en curso entre los paramilitares y el gobierno, sosteniendo que la desmovilización de los paramilitares sería un error militar estratégico.⁶

Sin embargo los paramilitares son más que una herramienta militar estratégica del ejército. Asimismo, están estrechamente aliados con y financiados por un grupo de elites económicas de Colombia. Ellos directamente implementan o facilitan las estrategias económicas de tales elites. Están profundamente involucrados en la industria de la droga. En territorios ganaderos, están vinculados con los terratenientes más importantes. En territorios mineros están vinculados con los líderes de la industria minera. Poseen estrechas conexiones a nivel nacional con financistas y especuladores en otros numerosos negocios. Estas elites económicas, en cambio, que enfrentan veloces desarrollos en términos de globalización y competencia internacional, se encuentran bajo creciente presión de promocionar la inversión y extracción internacional, lo que afecta la urgencia de la estrategia paramilitar en muchas regiones del conflicto.

Como resultado, la estrategia paramilitar posee matices regionales complejos afectados tanto por las exigencias militares como por los intereses económicos. Un análisis del conflicto directo que sostienen con las guerrillas en muchas regiones es que éste refleja la necesidad de controlar el territorio para acaparar una mayor porción del mercado de la droga y las ganancias consiguientes. En otros sitios, ellos desplazan una comunidad pretendiendo de ese modo quitar respaldo a las guerrillas, sin embargo luego facilitan la toma de posesión de las tierras por parte de los terratenientes aliados. O bien, nuevamente basándose en una defensa ideológica, ellos destrozarán el sindicato que está molestando a los industriales locales. El vigor con el cual ellos buscan eliminar la presencia de la guerrilla en un área está estrechamente vinculado con la medida en que ese grupo guerrillero haya sido exitoso en obtener fondos de sus aliados comerciales, o con la rentabilidad obtenida del territorio.

Nazih Richani sostiene que Colombia tuvo un sistema de guerra por décadas en el cual ni el ejército ni la guerrilla estaban buscando la victoria total.⁷ El ejército mantuvo el control de las áreas urbanas, sin embargo no refutó directamente el contra la guerrilla en muchas áreas rurales. Esta situación se mantuvo hasta 10 años atrás, luego de lo cual la guerrilla comenzó a desafiar a los militares en forma más directa, y el estado asimismo comenzó a combatir a la guerrilla más seriamente, ampliando la estrategia paramilitar. Un factor que contribuyó significativamente fue el rápido y creciente financiamiento disponible tanto para las guerrillas como para los paramilitares como resultado del control sobre territorios productores de coca.

Por lo tanto, el “sistema de guerra” estable se ha acabado, y se han sucedido recientemente cambios significativos en el control territorial, y más territorios “en disputa”, produciendo desplazamientos mucho más significativos. Debido a los costos económicos relacionados con el mantenimiento de grandes fuerzas (y con el acostumbramiento a los ingresos relacionados con las drogas), tanto la guerrilla como los paramilitares se encuentran bajo constante presión de controlar más territorio no solo por razones políticas o militares sino que también para tener bajo su control suficientes territorios productores de coca “tributables” para mantener el flujo de caja necesario para financiar la guerra.

El impacto civil ha sido habitualmente peor en territorios donde los paramilitares están disputando el control de la guerrilla, o donde los paramilitares están respaldando un impulso mayor para la explotación económica. Los paramilitares han utilizado tácticas de gran crueldad (masacres, asesinatos, destrucción de cosechas y casas, desplazamientos masivos, etc.) así como más tácticas sutiles de soborno y cooptación. La FARC también ha sido culpable del incremento de los abusos contra civiles. Tanto la FARC como el ELN desde hace tiempo han deseado secuestrar por dinero y matar a colaboradores civiles con el enemigo, sin embargo en períodos anteriores la mayoría de tales abusos de civiles se dirigían solamente a terratenientes y otras elites. Ahora bien no es poco frecuente que la FARC acuse a campesinos pobres de colaborar con el enemigo y se involucre en asesinatos, desplazamientos y masacres. Algunos sostienen que el fácil acceso de la guerrilla a las drogas y al financiamiento basado en la extorsión ha disminuido su responsabilidad frente a clase trabajadora o electorado campesino. Aunque la FARC alega ser un "ejército del pueblo" ante la opresión, su comportamiento de derechos humanos ha dañado profundamente la credibilidad de esa posición ideológica.

Political Violence statistics	
January – June, 2003	
Extrajudicial executions and international homicide of a protected person	922
Political assassinations	504
Combat deaths	1074
Cases of torture	157
Disappearance	132
Arbitrary detention	446
Kidnapping	207

La FARC ha ganado fuerza durante la última década, numérica y económicamente. Asimismo, el ejército y los paramilitares han ampliado su capacidad. El ejército y los paramilitares están en la ofensiva, con fuerzas aéreas superiores gracias al Plan Colombia, y la FARC pudo haber perdido cierta capacidad estratégica en los últimos años. Sin embargo, la FARC siempre ha tenido capacidad de recuperación, y nunca ha parecido en apuros, por lo tanto realizar predicciones acerca de los resultados militares en la guerra colombiana sería prematuro.

Una reciente dinámica en el conflicto para tener en cuenta es que el entorno “antiterrorista” internacional a partir del 11 de Septiembre, 2001 está facilitando la contrainsurgencia – en el sentido amplio y “anticuado” de los regímenes de terrorismo de estado de la “seguridad nacional” Latinoamericana entre 1950-1980. En nombre del antiterrorismo, y con aprobación internacional, el estado Colombiano está actualmente justificando sus medidas contra la población civil y en particular contra los movimientos sociales que atacan su capacidad de organizarse y protestar, incluyendo la manipulación del sistema judicial y la nueva legislación para facilitar la encarcelación y juicio de activistas políticos civiles.

El entorno social de Colombia es asimismo un factor crucial para comprender los intentos de la comunidad para crear espacios alternativos. Se trata de un país multiétnico, con una significativa población indígena y afro colombiana (cerca de 1/5 de su población). Ha sido históricamente "regionalizado" con un contacto social y económico mínimo entre las diferentes regiones⁸, manteniendo subculturas regionales significativamente diferente aún entre la mayoría mestiza. Tanto Chocó como Cauca se caracterizan por una presencia minoritaria étnica fuerte y por un importante sentido de identidad regional.

Colombia, asimismo, cuenta con una historia de resistencia popular sin violencia, movimientos masivos, movimientos sindicales y movilizaciones de campesinos. Los indígenas están orgullosos de sus esfuerzos de resistencia que abarcan 500 años, y la población Afrocolombiana cuenta con una impresionante historia de esclavitud y movimientos de resistencia de esclavos liberados. Existe una larga historia de autonomía comunal vinculada con la resistencia, en esas y otras comunidades. Esto ha surgido en oposición a la conquista (ya sea invasores españoles, o colonos ricos en busca de nuevas tierras o para explotar recursos) y porque el abandono de las áreas rurales por parte del estado creó la necesidad de autosuficiencia y autodefensa. La autonomía comunal ha sido reconocida legalmente tanto para los pueblos originarios como para los pueblos Afrocolombianos.

Primera parte: Chocó

Introducción/antecedentes

El departamento de Chocó, junto con alguna de las regiones fronterizas de Urabá, como una región combinada posee algunas de las cualidades de un “espacio alternativo”. Dentro de este espacio regional, existen un número de experimentos locales marcadamente diferentes y concretos. Examinaremos las experiencias de dos organizaciones:

- OREWA – La organización de todas las comunidades indígenas de Chocó.
- ACIA (o COCOMACIA – “Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato”. Esta es la asociación que reúne a todas las comunidades afro colombianas en el Medio Atrato.

Parte de la discusión abarcará la totalidad del departamento (tal como el “Foro de Diálogo” y el trabajo organizacional de OREWA). Sin embargo, los casos específicos que hemos estudiado componen sólo una parte del departamento, por ende solamente podemos llegar a conclusiones acerca de tales casos, sin generalizar respecto de otras comunidades o regiones del departamento. Entonces, por ejemplo, ACIA representa solamente a las comunidades Afrocolombianas del Medio Atrato. Otras comunidades Afrocolombianas de Chocó fuera del Medio Atrato (Ej. más al sur, y en otras partes del Bajo Atrato) asimismo han conseguido títulos colectivos respecto de las tierras y están defendiendo su autonomía, sin embargo, sin una investigación adicional, no podemos suponer que están utilizando la misma estrategia. Tampoco podemos hacer conclusiones acerca de su éxito o fracaso.

Características especiales de la región

Chocó es un territorio de agua y selva, donde los ríos copiosos y pequeños son el torrente regional, y el transporte para la mayoría de las personas es en botes (y para los pocos privilegiados, en avión). Los hombres y niños en Chocó discuten acerca de las variedades de motor fuera de borda con una intensidad reservada solamente para automóviles en muchos otros sitios. Las subregiones del departamento siguen los ríos: *El Bajo Atrato*, el *Medio Atrato* y el *Alto Atrato* han sido así nombrados por su ubicación en el río Atrato, y son tres de las subregiones más importantes. El control de los ríos significa el control del conflicto y de la economía. La región de Urabá, Antioquia (ver el mapa en el anexo 2) limita al noreste de Chocó, y también está unido por agua: El río Atrato es el conector más importante entre la mayor parte de Chocó y el mundo exterior, y alimenta el Golfo de Urabá cerca de la ciudad de Turbo, Urabá.

El acceso al territorio de selva húmeda de Chocó es dificultoso, y complicada la explotación de la agricultura. Por lo tanto, esta fue una de las áreas de Colombia más recientes en ser colonizadas – en diversas oleadas durante los comienzos hasta mediados del siglo 20. Esta colonización ha sido en su mayoría llevada a cabo por Afrocolombianos pobres, provenientes de Antioquia y otras regiones costeras del Caribe. La mayor parte de la población de Chocó es Afrocolombiana. El siguiente grupo más extenso es el de los pueblos originarios que ya estaban en el área. Una población mestiza mucho más pequeña se encuentra concentrada principalmente en ciudades más grandes. Las poblaciones afro colombianas e indígenas han coexistido como vecinos, viviendo en forma separada en pequeños pueblos que subsisten de la agricultura y la pesca. Ambas cuentan con profundas tradiciones de autonomía étnica y comunal – autonomía en

la práctica y autonomía en términos de compromiso ideológico. Ambos han sido históricamente excluidos de los círculos de poder de las elites en Colombia. Los sistemas sociales están estrechamente afectados por la realidad autosuficiente de las economías. En general la gente vive de la agricultura de subsistencia propia y de un reducido comercio local con solamente un componente menor de la economía compuesto por trabajadores que obtienen ingresos fuera de la comunidad, por ejemplo realizando tareas itinerantes, tareas forestales u otras actividades contratadas.

Debido a las dificultades de la explotación del terreno y la economía, el territorio ha sido ignorado por el estado hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo no posee una ubicación estratégica muy importante: la frontera con Panamá facilita el negocio del contrabando. Cuenta con ríos navegables y está muy próxima a los puertos más importantes del Caribe (Cartagena y Barranquilla). Su acceso marítimo tanto al Atlántico como al Pacífico ha sido motivo de especulaciones acerca de la creación de una alternativa de transporte comercial en Colombia para competir con el Canal de Panamá.

Sus ríos y el agua están despertando interés por parte de los sectores de la industria agrícola dedicados a la piscicultura.

Cuenta con recursos minerales y muchas maderas preciosas. Posee algunas tierras que son aptas para el pastoreo, y el ecosistema produce naturalmente Aceite de Palma Africano, que también atrae a los inversores.

La intensa violencia de la guerra civil es relativamente reciente en Chocó, su comienzo data solo de mitad de los 90 con un violento ataque militar/paramilitar. Algunos consideran que el interés reciente en la explotación económica del territorio está avivando el conflicto.

Comprensión del conflicto en Chocó

El alcance de esta guerra en las regiones de Chocó abandonadas previamente representa un cruce de intereses económicos y militares ambos concentrados en el control del territorio. Antes de 1990, los elementos del conflicto estructural fueron generándose conjuntamente en forma gradual, sin embargo la amplia disponibilidad de tierra evitó enfrentamientos muy importantes. Las esporádicas incursiones de explotación económica causaron pesares, pero la población pudo adaptarse. La penetración económica en Chocó se limitó principalmente a la extracción de maderas y minerales, un proceso que no demandaba ni control territorial ni infraestructura. La presencia del estado era mínima, casi inexistente.

En los 80s, con el respaldo de la Diócesis de Quibdó, se realizaron esfuerzos organizacionales que comenzaron a unir a las comunidades en pos de obtener apoyo mutuo y que dió como resultado a dos grandes organizaciones: OREWA y ACIA. Ambos grupos alcanzaron autonomía de la Diócesis, con firmes y crecientes capacidades para la organización, las que desarrollaron por un tiempo antes de que el conflicto a gran escala alcanzara la región. Un logro crucial de ambos grupos fue establecer control legal sobre los territorios mediante la títulos de propiedad colectivos oficialmente sancionados. Los indígenas alcanzaron este logro primero, y luego (en los 90s) lo hicieron los afrocolombianos.

La guerrilla tuvo presencia en la región antes de los 90s, sin embargo no se integró con la población para nada. La guerrilla utilizaba estas áreas aisladas para entrenamiento, descanso, y

para el paso de contrabando. No había confrontación militar - ya que no había presencia del estado con la cual confrontar. Tampoco se registró una significativa cooptación o reclutamiento, debido a que la mayoría de la guerrilla era de origen mestizo, con escasa conexión con los afrocolombianos locales o con las comunidades indígenas. La presencia de la guerrilla fue mínimamente explotadora y no atrajo la respuesta del estado o de los paramilitares, debido a que había pocas fuentes de impuesto a las ganancias, y la región despertaba poco interés estratégico.

A pesar de la paz relativa, las semillas del conflicto estructural estaban en el lugar: había un creciente interés económico y estratégico externo gradual en las tierras justo cuando estas comunidades estaban consolidado su control sobre las mismas. En los territorios limítrofes la guerra se estaba intensificando. Los años 90 fueron testigo de una serie de dinámicas intervencionistas en Chocó entre varios actores, cada uno reforzando al otro en un proceso de escalada.

La intensificación del conflicto

Las intervenciones armadas siguieron los intereses económicos. El área fronteriza de Urabá y Antioquia era muy estratégica, debido a la presencia de la autopista Pan Americana, y el extremadamente lucrativo “Corredor Banana”. Esta región ha sido testigo del desarrollo más fuerte de organizaciones paramilitares así como de la presencia de la guerrilla durante décadas. A principios de los noventas, los intereses de la pesca y minerales acompañaron el ingreso de la presencia paramilitar desde Antioquia, vía Carmen del Atrato y Quibdó. Al norte, los terratenientes de Urabá comenzaron a expandirse al noreste de Chocó donde establecieron haciendas ganaderas. En 1996, los militares y paramilitares ingresaron en el Bajo Atrato desde Urabá, y se expandieron rápidamente río arriba hasta el Medio Atrato. Los paramilitares también ingresaron a la región desde el sur mediante el Río San Juan, una región minera. A lo largo de la región, los residentes locales comenzaron a sentirse aterrorizados y se desplazaron de sus hogares.

La guerrilla también comenzó a ampliar su presencia. Tenía el doble motivo de defender un territorio donde tradicionalmente había tenido presencia armada exclusiva, y el deseo de tomar ventaja del potencial creciente de ingresos (por ejemplo, cuando los terratenientes se mudaron a las áreas de Urabá lindantes con Chocó, el ingreso potencial de la guerrilla tradicional de gravar impuestos / extorsionar a los terratenientes se incrementó). Del mismo modo, como las industrias extractivas (madera, minería) se trasladaron al igual que otros desarrollos de agro negocios (especialmente Palma Africana, piscicultura, granja de camarones y coca), para las guerrillas era más sencillo sostener una presencia más importante en Chocó.

Las intervenciones paramilitares y económicas más significativas de mediados a fines de los 90s colisionaron con los procesos ya avanzados de organización y el control de la tierra por parte de ACIA y de OREWA. Todas las comunidades indígenas contaban con los títulos colectivos de sus tierras y las decisiones acerca de la explotación de dichas tierras requerían la toma de decisión a nivel comunal. Asimismo, el en Medio Atrato, ACIA en 1997 controlaba un único título de tierra colectivo para la totalidad de las áreas no-indígenas del Medio Atrato, que comprendía a 119 comunidades. En el Bajo Atrato, los procesos organizacionales no estaban tan avanzados, y todavía no se había alcanzado demasiado en términos de títulos de propiedad colectiva de las tierras.

Por lo tanto, el control territorial en gran parte de la región estaba establecido legalmente. El conflicto llegó a una intervención militar y económica orientada a ganar control de facto sobre el territorio, que fue indiscutiblemente la propiedad de los residentes. La existencia de títulos de propiedad colectiva de las tierras representó un serio problema para esta intervención (que por otra parte no fue diferente a la extensa historia de intervenciones "de expropiación" en todo Colombia). Es muy posible que aquellos que implementaron esa estrategia de expropiación de tierras mediante la fuerza y el desplazamiento no estuvieran al tanto del problema legal que tendrían que enfrentar. Estas comunidades todavía eran propietarias de las tierras aún cuando fueron desplazadas. *Por lo tanto, la existencia de estos títulos colectivos fue una importante motivación no solo para regresar a sus hogares sino también para mantenerse unidos como comunidades.* Las fuerzas de intervención (económica y paramilitar) intentaron diversas estrategias para "comprar" o "utilizar" dichas tierras, sin embargo la única solución legal requiere del consentimiento total de la colectividad que posee el título de propiedad, y una negociación de cada título. Esto significa, por un lado, que las comunidades con títulos colectivos respecto de sus tierras están en una posición fuerte para protegerla de usurpación. Pero esto también significa que sus procesos de organización y unidad colectiva desafían directamente una combinación de fuerzas implacables (elites económicas, militares y paramilitares), cuya respuesta lógica consiste en captar y debilitar esos mismos procesos colectivos con una variedad de estrategias abusivas e intimidatorias.

Las estrategias de ACIA y OREWA

Existe por supuesto un profundo contraste entre las comunidades indígenas y las afro colombianas, y esta investigación podría ser enriquecida con un enfoque más complejo en términos etnológicos y sociológicos que el que podemos brindar. Lo que descubrimos, sin embargo, es que ante conflictos similares, y con similitudes significativas en términos de la posición legal de sus comunidades, ACIA y OREWA han respondido a la guerra con estrategias defensivas similares y notables que analizaremos en conjunto.

Identidad Cultural

Unidad e identidad son factores claves para la resistencia de ambas culturas. Dentro de sus comunidades en forma separada, los indígenas y los afrocolombianos cada uno cuenta con un alto grado de homogeneidad, una historia, tradiciones y sistema de creencias compartidos. Ellos consideran que tanto la estrategia paramilitar así como las imposiciones militaristas de las guerrillas están destinadas a destruir esa unidad cultural. Ambos grupos remarcaron la importancia de fortalecer sus tradiciones culturales *como una estrategia destinada a mantener la unidad ante el conflicto.* Esta unidad ayuda a los individuos a resistir las presiones para colaborar con grupos armados.

Autonomía Legal

No se puede dejar de recalcar la importancia crucial de los títulos de propiedad colectiva de tierras y el autogobierno legislado de las comunidades. Tanto los indígenas como los afro colombianas en Chocó están tomando ventaja de una realidad legal única, una realidad que ellos ayudaron a crear. Los indígenas desde hace mucho tiempo que poseen derechos colectivos legales de los territorios y una autonomía reconocida con respecto a ese territorio, y con respecto a su propio autogobierno dentro del territorio. Para los afrocolombianos, este ha sido un logro mucho más reciente.

En 1991, una Asamblea Constitutiva creó una nueva constitución para Colombia, que fue bastante progresiva en muchas maneras.¹⁰ Las organizaciones Afro colombianas de las regiones pacíficas, junto con representantes indígenas en la Asamblea Constitutiva, se unieron en una campaña de apoyo para presionar a esa asamblea constitutiva a reconocer constitucionalmente los derechos culturales de ambos grupos. En esta campaña también estaban promocionando una propuesta para permitir los títulos de propiedad colectiva respecto de sus tierras. En una campaña denominada "*Telegrama Negro*" se movilizaron más de 10.000 telegramas dirigidos a la asamblea por parte de los afrocolombianos. Esto se combinó con estrategias en los medios de comunicación y negociaciones entre bastidores con representantes de la asamblea, y con protestas de acción directa que incluyeron la toma de la oficina del alcalde de Quibdó y la oficina de reforma agraria local de Chocó. El obispo de Quibdó participó de las negociaciones del proceso.¹¹

La nueva Constitución no creó reglamentos excepcionales para las minorías étnicas, sin embargo reconoció el carácter pluralista y multiétnico del país y abrió el camino para una legislación específica con respecto a las propiedades colectivas. El artículo transitorio 55 de la Constitución puso en movimiento el proceso legislativo que en 1993 dio como resultado la "Ley 70" – una articulación compleja de los derechos de las comunidades afro colombianas por su autonomía, autogobierno y títulos de propiedad colectiva respecto de sus tierras. En los dos años anteriores a la aprobación de la "Ley 70", ACIA continuó organizando campañas de apoyo así como participando en la promulgación de propuestas legislativas. Organizaron una serie de campañas de educación legal en todas las comunidades de ACIA.

La "Ley 70" fue un hito inesperado y poderoso. Reconoció los derechos de los Afrocolombianos a la propiedad colectiva de tierras y establece mecanismos para el establecimiento de los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad colectiva de tierras incluyen "territorios colectivos de la comunidad" que en ninguna circunstancia podrán ser vendidos y su explotación solamente podrá realizarse mediante acuerdo de la comunidad, y también incluye otras tierras asignadas a familias que solamente se pueden vender a otras familias dentro de la comunidad. La Ley 70 también reconoce los derechos de los Afrocolombianos de establecer mecanismos comunitarios autónomos para proteger su cultura, identidad y derechos. Reconoce a estas comunidades el control respecto de su propio desarrollo y establece la legitimidad de los "Consejos de la Comunidad" para supervisar tal desarrollo.¹²

Por último, después de años de presión legislativa y organización para unir las comunidades, en 1997 ACIA solicitó y obtuvo un único título de propiedad que cubre cerca de 700.000 hectáreas: la tierra combinada de 119 comunidades Afrocolombianas en el Medio Atrato (91 ubicadas en Chocó y 28 ubicadas en Antioquia). Estas comunidades unidas consolidaron el control legal autónomo respecto de su territorio y su desarrollo/explotación, justo cuando los paramilitares de las AUC estaban instalándose para quitarles esas tierras.

Control Social Interno

Tanto ACIA y OREWA recalcaron la necesidad de un enfoque comunitario unificado para todos los contactos con las guerrillas, los paramilitares y el ejército. Esto requirió de una disciplina

difícil de mantener. Por ejemplo, ambas comunidades étnicas poseen una tendencia de “hospitalidad” cultural y están bajo presión para alojar a aquellos en el poder por su supervivencia. Estas tendencias han históricamente dejado a las comunidades propensas a la infiltración y manipulación por parte de los grupos armados. Ellos se involucrarían en comercio con grupos armados. Por momentos ellos permitieron que grupos armados en el área impusieran su propia “justicia” o asignaran castigos a cualquier persona que ofendiera el orden local, en lugar de insistir respecto de su propia autonomía en cuestiones de control social interno. Estos contactos y relaciones llevaron a represalias y acusaciones por los grupos armados opositores cuando el conflicto recrudeció.

Para mantener la independencia ante la presencia creciente de grupos armados, las comunidades tuvieron entonces que definir códigos claros de conducta para sus miembros, definiendo las repuestas con respecto a todos los grupos armados.¹³ ACIA los denominó “reglamentos de conducta” que se escribieron y acordaron, y sirvieron ostensiblemente para dar a todos los miembros de la comunidad un “discurso” unificado ante los grupos armados con los que entrarán en contacto, minimizando el riesgo de acciones que pudieran provocar luego una represalia. Básicamente, el discurso es: “Si quieren mantener una separación del otro lado, nosotros tenemos que poder hacer lo mismo con respecto a Ustedes” OREWA tuvo un proceso similar, que incluyó un paquete de acuerdos denominado “planes de vida”.

En principio, tanto las comunidades indígenas como las afrocolombianas poseen la autoridad legal para juzgar y castigar infractores dentro de su comunidad, y este poder ha sido utilizado para impedir que los miembros de la comunidad sean reclutados por grupos armados.

Estrategias reactivas para confrontar desafíos al territorio

Todas las comunidades estaban enfrentando un conjunto de desafíos similares con respecto a los grupos armados, y estaban desarrollando numerosas respuestas, que brevemente mencionaremos aquí:

Estrategia del actor armado: reclutamiento voluntario

Estrategias reactivas de la comunidad:

- Fortalecer la unidad cultural.
- Crear códigos de conducta.
- Imponer sanciones: tales como amenazar con la expulsión de la comunidad. Los representantes indígenas, asimismo, mencionaron sanciones contra las mujeres que se involucran con combatientes de cualquier grupo.

Estrategia de actor armado: reclutamiento forzado

Estrategias reactivas de la comunidad:

- *Denuncias de Derecho Humanos*, utilizando redes nacionales e internacionales.
- *Respuesta indígena*: Acción directa – búsqueda directa del grupo armado y exigencia de regreso de la persona reclutada (ya sea voluntaria o forzada). Algunos de los encuestados describieron incidentes en los que se rodeó a un grupo de guerrilla para demandar la devolución de una persona. (Tal estrategia no fue descrita en el caso contra los paramilitares).

Estrategia de actor armado: Ataques contra el derecho a la vida (asesinatos, desapariciones, amenazas de ello)

Estrategias reactivas de la comunidad:

- *Denuncias de Derechos Humanos*, utilizando redes nacionales e internacionales.
- Organización de comisiones de investigación, que incluyen (a) comisiones de liderazgo de las comunidades, (b) comisiones que involucran a la Diócesis u otros actores nacionales (incluyendo a representantes del Estado, como es la Defensoría ^{fn}, etc.), (c) comisiones que involucran ONGs internacionales, cuerpos diplomáticos, las Naciones Unidas cuyos informes ampliaron la presión de las denuncias de las comunidades. (d) combinaciones de lo antedicho.
- *Comunicación directa con grupos armados*: OREWA sostiene que hablar directamente con el grupo armado requiere de una justificación para tal acción. (Nota: el discurso de OREWA es consecuentemente hablar con las "fuerzas armadas" en lugar de diferenciar entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército, por lo tanto es difícil determinar y analizar algunas de las afirmaciones como esta, distinguir si este enfoque fue tratado con todos los grupos armados, o solamente algunos).

Estrategia de actor armado: "Bloqueo" económico y físico (robo, impuestos, inhibiciones o intimidaciones contra los viajes)

Una práctica usual de los paramilitares y en menor medida de la guerrilla es la de establecer bloqueos de ruta). En Chocó, esto significa puestos de control a lo largo de los ríos. En estos puestos de control a menudo se confiscaban los bienes y el dinero, basándose en que supuestamente se estaban transportando esos bienes para respaldar el grupo armado opositor. Estos bloqueos a menudo han establecido un mínimo de un valor fijo o cantidades por persona, sobre el cual no estaba permitido pasar los bienes. Estos puntos de control son un lugar de frecuentes amenazas y a veces detenciones o desapariciones, y por lo tanto el miedo que provocan también inhibe los viajes generalmente. Este *bloqueo de facto* lentamente liquida los intercambios económicos de una comunidad con otras, y eventualmente propicia el desplazamiento.

Estrategias de respuesta de OREWA:

- Denuncia pública
- Discurso maximalista: *"siempre nos trasladaremos y no permitiremos los bloqueos y amenazas de que nos detengamos. Si aceptamos eso no podremos pasar, y ese es el fin"*
- Siempre trasladarse en grupos
- Monitorear todas las entradas y salidas de los miembros de la comunidad para estar alertas y detectar cuando un miembro de la comunidad no se hace presente cuando debe hacerlo.

Estrategias de respuesta de ACIA:

- Denuncia pública
- Tiendas comunitarias: Con la ayuda de la Diócesis de Quibdó, ACIA estableció tiendas comunitarias en muchas comunidades.
- Arca de Noé: Para abastecer las tiendas comunitarias, ACIA compró un bote grande, al que llamaron Arca de Noé. Una vez al mes el bote se cargaba en Quibdó con suficientes mercancías para reabastecer todas las tiendas comunitarias. Entonces el bote viaja río abajo, con un visible acompañamiento internacional y/o de la iglesia a bordo, para entregar víveres

a cada comunidad. Con anticipación, por radio, anuncian el itinerario completo del trayecto del bote con una transparencia total. El costo político de un grupo armado por un ataque o por robo al Arca de Noe era mucho mayor que contra un comerciante individual o una comunidad.¹⁵

Estrategia de actor armado: desplazamiento forzado

La estrategia pública de OREWA, ACIA y la Diócesis es la misma:

- Desalentar el desplazamiento. Hacer hincapié en los costos traumáticos del desplazamiento.
- Denuncias y comisiones de derechos humanos (como se menciona anteriormente).
- Alentar a las personas y las comunidades para que resistan la presión de que se marchen de los lugares locales seguros. En el caso de desplazamiento local, establecer “lugares seguros” con alojamiento temporario dentro del territorio de la comunidad, para minimizar la distancia y la duración de los desplazamientos. ACIA los denomina “Centros Humanitarios”, OREWA los denomina “Dearade”. En ambos casos, esta parece ser una nueva estrategia que nos se ha probado en su totalidad. Es una estrategia que toma en cuenta que las residencias o barrios de las familias rurales se encuentran bastante aisladas y vulnerables de intimidación. Una vez atacadas o amenazadas, las personas se pueden sentir más seguras si se reúnen con otras personas sin tomar el paso extremo de huir a un sitio distante.¹⁶
- En el caso de desplazamientos serios, la estrategia consiste en dar apoyo y alojamiento a aquellas personas desplazadas y luego animarlos y organizar el regreso colectivo más pronto posible, con la ayuda de la presión política, haciendo uso de alianzas y comisiones. Varias comunidades en esta región han tenido que dejar sus hogares, pero una parte de estas han podido regresar con el apoyo organizado de ACIA, OREWA, la Diócesis de Quibdo, la Diócesis de Apartadó, y otras ONGs colombianas e internacionales.

Cuadro 1: La Masacre de Bojayá

El peor ataque que afectó a los miembros de ACIA ocurrió en mayo del 2002 en Bellavista, Bojayá- notoriamente, la peor masacre cometida por la FARC durante toda la guerra Un contingente paramilitar abiertamente, estableció una base en esta comunidad, y la FARC los atacó. Durante la lucha, la población civil se refugió en la iglesia y los paramilitares mantenían sus posiciones cerca de esa iglesia. En un momento, la FARC lanzó un cilindro bomba que impactó directamente en la iglesia y causó 119 muertes y muchos heridos. El uso de cilindros bomba ha sido una de las mayores críticas contra la FARC realizada por grupos de derechos humanos, debido a que los impactos de estas bombas son indiscriminados e inexactos. La FARC y otros grupos locales, también han responsabilizado a los paramilitares por haber usado la comunidad como un escudo. El estado y el ejército utilizaron este evento para justificar una rápida expansión de la presencia del ejército y de los paramilitares en el área, dando por resultado un incremento de las intimidaciones de las comunidades vecinas luego de la masacre. La combinación de la masacre y las intimidaciones subsiguientes ocasionaron un desplazamiento sustancial. ACIA, la Diócesis de Quibdo y las ONGs nacionales e internacionales vehementemente condenaron a ambos grupos armados así como al estado y al ejército (por no haber intervenido los días previos a la masacre cuando los residentes locales estaban protestando por la presencia paramilitar.

Discusión

La unidad colectiva y el control colectivo de las tierras fueron dos de los temas predominantes de nuestras entrevistas. Como describimos, la estrategia de control colectivo del territorio precedió al recrudecimiento del conflicto: ACIA había estado trabajando cerca de una década para alcanzar el título colectivo del territorio, y OREWA ya lo tenía. Ellos consideran el control colectivo del territorio como parte inherente de su cultura, sin embargo tal control implicó la creación de fuertes vínculos organizacional, una estructura estricta que conecte varias comunidades, y las eduque tanto en política nacional y realidades legales para poder exigir el lugar que les corresponde dentro de esas realidades. La unidad organizacional de varias comunidades y las experiencias de apoyo político nacional obtenidas durante esos procesos demostraron ser fortalezas esenciales para estas comunidades cuando estalló el conflicto en sus aldeas en los 90s.

La incursión de los paramilitares y el recrudecimiento del conflicto en Chocó comenzó hace más de 7 años atrás. Las comunidades de ACIA y OREWA todavía enfrentan presiones económicas desesperantes debido a los bloqueos, los desplazamientos temporarios y la continuada falta de apoyo por parte del estado. Enfrentan constantes intentos insidiosos por parte de las fuerzas económicas externas para quebrar su compromiso de control autónomo respecto del uso de las tierras. Existen continuas presiones sobre los individuos para que “vendan” los territorios que no poseen derecho legal para vender, con la intención de que personas desconocidas puedan explotar, por ejemplo, la producción de Aceite de Palma Africano.

Aun peor, continúan viviendo en una zona de guerra, sometidos a constante hostilidad e intimidación, lo que indica que no hay señales de disminución. Ellos temen quedar atrapados (o ser colocados a drede) en la línea de fuego entre los paramilitares y la guerrilla, tal como ocurriera en la masacre de Bojavá. Su organización, constantemente, debe dedicar una energía preciosa a las denuncias de derechos humanos y a otras acciones defensivas a corto plazo, debilitando su capacidad de invertir en el desarrollo de la comunidad a largo plazo.

Tenemos la impresión de que a pesar de estas presiones y de los estragos de la guerra en curso, estas comunidades han en general podido mantener y hasta fortalecer su sentido de unidad y autonomía. Todavía poseen el control legal del territorio, y continúan con sus propias estrategias de desarrollo. Aunque hay un desgaste de los individuos, estas comunidades han en su mayoría evitado los desplazamientos masivos. Las dos organizaciones creen que sus estrategias organizacionales que giran en torno a la unidad colectiva y autonomía cultural son fundamentales para su propia supervivencia dentro del conflicto circundante.

Nadie puede predecir los resultados locales de la guerra en Colombia, por lo tanto no podemos afirmar como las estrategias de autonomía y supervivencia de ACIA y OREWA se desarrollarán mientras el conflicto continúe recrudeciéndose. Dejamos Quibdo, sin embargo, inspirados y profundamente movilizados por el compromiso de los líderes y activistas de estas comunidades de permanecer juntos y defender su tierra natal, mientras soportan un gran sufrimiento y temor.

Segunda Parte: La Comunidad de Paz de San José de Apartadó

La primera parte se centró en las campañas a largo plazo que precedieron el advenimiento de un conflicto mayor. Con el rápido recrudecimiento de la guerra luego de 1996, la región de Chocó-Urabá asimismo registró otras varias experiencias traumáticas espontáneas, en las cuales las comunidades se declararon oficialmente espacios alternativos, ya sea como "comunidades pacíficas" o comunidades en resistencia". Estas incluyeron:

- San Jose de Apartadó (Comunidad de Paz en Urabá)
- Cacarica – una comunidad de “Autodeterminación, Vida y Dignidad” en Bajo Atrato.
- San Francisco de Asís y otras varias comunidades asociadas – Un grupo de “Comunidades de Paz” en Bajo Atrato.
- Jiguamiando- “Comunidades en Resistencia” en Bajo Atrato.

Aquí, hemos dedicado nuestra atención al caso específico de *San José de Apartadó*.

San José de Apartadó (en lo sucesivo San José) es un municipio, o conjunto de pequeñas aldeas, fundadas en 1970 y ubicadas en la serranía de Abibe, una cordillera que se extiende del norte al sur en el extremo oriental de Urabá. (Ver mapa en el Anexo 2). San José, legalmente, es parte de la municipalidad de Apartadó, que a su vez, es la ciudad principal de Urabá, ubicada debajo de San José, justo sobre la Autopista Panamericana y constituye una ciudad clave del "Corredor Banana" noroccidental. Durante los 90s, San José estaba compuesta por 3.000 personas divididas en 32 aldeas. Algunas de estas aldeas se encontraban a casi 8 horas a pie desde el centro de la aldea de San José. La mayoría de los habitantes son blancos ¹⁷, campesinos que llegaron a mediados del siglo XX escapando de La Violencia en otras regiones. La economía consiste en el cultivo de pequeñas parcelas de tierra para subsistir y el comercio a pequeña escala, junto con algunas actividades de ganadería. Como en otras de las regiones analizadas, el estado posee una presencia muy frágil o mínima en San José.

San José está separada de la ciudad de Apartadó por un escarpado camino cuesta arriba. Aunque insume solamente 45 minutos en un vehículo de cuatro ruedas, esta diferencia es de un aislamiento significativo. Hasta comienzos de 1990, la guerrilla ¹⁸ tenía una presencia habitual en Apartadó, y en general en todos los municipios a lo largo de la Autopista Panamericana en el Corredor Banana. Ha existido una intensa lucha por el control de la región entre las guerrillas, el ejército y los paramilitares financiados por los terratenientes y los dueños de las plantaciones de plátano. El conflicto se intensificó en 1995 con el ingreso de las ACCU (“Autodefensas de Campesinos de Córdoba y Urabá” la organización paramilitar fundadora de la AUC organización paraguas nacional). La situación se complicó con negociaciones de paz que dieron lugar a una desmovilización del ELP, el grupo más pequeño de la guerrilla – luego de la cual algunos miembros del ELP fueron cooptados por los paramilitares, y esto ocasionó una terrible y sangrienta guerra contra otras guerrillas anteriores y todas las organizaciones sociales de la región. A fines de los 90s, el ejército/las alianzas paramilitares ganaron el control de la Autopista Panamericana y del Corredor Banana, y luego comenzaron a penetrar en el Bajo Atrato, culminando con una brutal invasión del área del Bajo Atrato que causó un desplazamiento masivo en 1996-97, conocido como *Operación Génesis*.

Sin embargo el control de la Autopista Panamericana no garantizaba el control de la región completa, dado que colina o montaña arriba (como en Abibe, donde se ubicaba San José) las guerrillas todavía podían moverse, con un acceso relativamente desinhibido a Chocó y a otras partes del país. Por lo tanto los militares siempre han considerado a las serranías de Abibe como una ubicación estratégica de control, especialmente San José porque es uno de los puntos de acceso clave entre el corredor Banana y esas montañas.

Durante los 70s, la represión del ejército contra los campesinos había creado simpatía con el Partido Comunista, que estaba activo en la región, y luego con la Unión Patriótica. La combinación de las dinámicas militares locales con la campaña de represión a nivel nacional en contra de la Unión Patriótica en los 90s, provocó que San José sea un escenario frecuente de combates y ataques contra la población civil – eventualmente causando un desplazamiento masivo,

La Creación de una “Comunidad de Paz”

En 1996, la Diócesis de Apartadó, junto con el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, y la ONG Holandesa Pax Christi propusieron una idea nueva a los líderes de la comunidad de San José: la creación de una "zona neutral" basada en los principios de la ley humanitaria internacional. El plan era lograr un mayor nivel de respeto por una población civil comprometida con la no colaboración con ninguno de los actores armados, para generar atención a esta neutralidad a través de declaraciones formales, apoyo político externo y proyectos de desarrollo con presencia de la iglesia y de organizaciones no gubernamentales.

La discusión acerca de esta estratégica se extendió por varios meses. Mientras tanto, otras comunidades en bajo Atrato estaban siendo entonces desplazadas por la Operación Génesis o estaban soportando la vida en campos para refugiados en Pavarando, y Turbo u otros lugares, por lo tanto las mismas ONGs también comenzaron a discutir acerca de la idea de la “comunidad de paz” con ellos. De este modo estas experiencias separadas de "comunidad de paz" tenían comienzos casi simultáneos, aunque alcanzaron resultados muy distintos.

En general, la discusión de la estrategia estaba influenciada por las siguientes dinámicas:

- La mayor parte de la discusión se llevó a cabo dentro de las organizaciones que estaban proponiendo la estrategia. La participación de la población fue organizada a través de talleres, la mayoría participó a través de líderes comunitarios. Se involucraban más población en general en algunos casos, principalmente en la etapa de ratificación.¹⁹
- El proceso fue influenciado por un evento particular que ocurrió fuera de la región y que alcanzó repercusión nacional a través de los medios. Durante ese período las comunidades de las Organizaciones Indígenas de Antioquia públicamente declararon la estrategia de "neutralidad activa". Esta organización tenía líderes claves que formaban parte del gobierno de Antioquia conducido por el Gobernador Alvaro Uribe Vélez (actual Presidente de Colombia). Álvaro Uribe cooptó este proceso, tomando una serie de medidas para institucionalizar las propuestas de neutralidad activa e instó a todas las comunidades a que las acepten. Sin embargo la versión de Uribe acerca de “neutralidad” se aplicaba solamente a las relaciones de las comunidades con la guerrilla. Esta apropiación distorsionada pero bien

publicitada del termino “neutralidad” por parte de Uribe llevó a que muchas otras comunidades a rechazar ese concepto de neutralidad, ya sea porque no estaban de acuerdo con ello, o porque sentían que era imposible de sostener esa posición de exclusión hacia solamente uno de los actores armados en las regiones donde la guerrilla tenía una influencia significativa.

- No todas las instituciones involucradas en este proceso compartían las mismas opiniones acerca de la idea de una "Comunidad de Paz". La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP), por ejemplo, sostuvo que para declararse “neutral” en un conflicto tan desequilibrado con profundas causas de raíz e impactos social y territorial en la población civil, significaba la cesión voluntaria de un espacio y una libertad tan importante políticamente – como la libertad de expresión. CISP propuso que las comunidades se declarasen a si mismas "Comunidades en Resistencia" en el área del conflicto.

Finalmente se alcanzó un consenso, y la población de San José de Apartadó formalmente decidió declararse a si misma “Comunidad de Paz”. La Diócesis de Apartadó consultaba con los actores militares principales en la zona: La FARC y los paramilitares, y ambos grupos aceptaron en principio la existencia de una comunidad de paz. (Como se observará más adelante, ningún grupo armando, ni el ejercito, cumplió con este supuesto compromiso de respetar la comunidad). El 23 de marzo de 1997, luego de una serie de consultas comunitarias, la mayoría de la población aprobó la declaración de San José de Apartadó como una Comunidad de Paz.

Organizacional y socialmente, esta situación dió comienzo a un proceso muy complicado. Por ejemplo, no todos los residentes querían ser parte de una "Comunidad de Paz", sin embargo la interacción de cualquier residente con un actor armado en la región afectaría la estrategia de la comunidad. La dispersión de aldeas muy pequeñas a grandes distancias ocasionó que fuera difícil mantener la unidad y la coherencia.

Luego de bastante discusión, la comunidad de paz formalmente distinguió a tres grupos dentro de la población bajo su influencia:

- “La población civil no-combatiente residentes en el municipio que se ha comprometido libremente con el proceso de Comunidad de Paz”
- “la población civil que no participa de hostilidades y se compromete con los reglamentos y estatutos de la comunidad, y
- “otras personas con presencia transitoria en la comunidad, que se han comprometido con los estatutos y los reglamentos y por lo tanto están cubiertos por los estatutos que protegen a la población civil”²⁰

La tercera categoría demostraba una flexibilidad para permitir la residencia temporaria siempre que fueran aceptados los estatutos y reglamentos. La residencia temporaria se consideraba un riesgo potencial para la seguridad e infiltración. Sin embargo también aprendimos que en otras comunidades de paz (San Francisco de Asís) una política más estricta que limitaba las visitas externas fue causa de una importante división y tensión internas.

La dificultad de discernir entre los miembro de la Comunidad de Paz y aquellos que no eran miembros era más complejo en las áreas rurales alejadas, donde las casa estaban bastante aisladas y la participación en la comunidad era mínima. Sin embargo no estamos al tanto de

ninguna tensión que hubiera surgido entre los diferentes grupos miembros y grupos no miembro en San José.

Existían otras tensiones, sin embargo. Por ejemplo, el reglamento de la comunidad prohibía la venta de alcohol en cualquier parte de la comunidad, por miedo de que esto atrajera combatientes a la zona, o que provocara disturbios sociales que empañarían la imagen de la comunidad. En un país con una tradición de beber tan importante, esta norma provocó un sinnúmero de conflictos y debates, especialmente entre los líderes de la comunidad y los pequeños comerciantes. Pero con las situaciones de seguridad empeoraron, la percepción compartida del riesgo colaboró para que se mantuviera la norma en firme, no obstante con un importante número de transgresiones.

Las Estrategias de Protección

La estrategia de comunidad de paz tuvo tres pilares:

- 1) la no colaboración con todos los actores armados
- 2) la declaración formal para general atención pública.
- 3) el apoyo político externo y proyectos de desarrollo.

Cómo distinguir entre los actores armados

La concepción de la comunidad respecto de “actor armado” incluyó al Ejército de Colombia desde el comienzo que fue causa de continua fricción. El ejército insiste en que no es “una actor armado más” sino una institución legítima del estado, con obligaciones legales y derechos a lo largo del territorio nacional, que incluye el derecho de esperar colaboración por parte de la población. La comunidad, dada sus experiencias con la represión del ejército, no estuvo de acuerdo.

Además, para muchos en la comunidad era fundamental distinguir entre los diferentes grupos armados de acuerdo a su naturaleza y objetivos, aún cuando todos acordaran que no había distinción aceptable respecto de acciones tomadas contra la población civil. Para otros, sin embargo, el hecho de hacer cualquiera de tales distinciones equivalía a expresar apoyo a la guerrilla, lo que podía poner en peligro a toda la comunidad. Entonces este grupo insistía con enfoques absolutamente equivalentes con cada grupo armado. Así, cuando se trataba de violaciones a los derechos humanos, una posición era “denunciar todas las violaciones a los derechos humanos de la misma manera” mientras que otra posición sostenía “denunciar todas las violaciones con la misma fuerza, sin embargo con la estrategia apropiada a la naturaleza del perpetrador”.

Una activista compartió con nosotros la analogía de un campesino que describía la necesidad de diferentes estrategias. *“El tigre y la hiena no son el mismo animal, aunque ambos pueden mordernos. Necesitamos entender la diferencia para protegernos a nosotros mismos”*

No-colaboración

Como en el Medio Atrato, la no colaboración requería un conjunto de normas para guiar cualquier interacción directa con actores armados, y un reglamento interno relacionado con el comportamiento y el funcionamiento de la comunidad. La declaración de la comunidad y el reglamento interno establecían las normas que abarcaban ambas áreas.

Bajo el subtítulo, “principios para orientar la experiencia de una resistencia civil” por ejemplo, se incluía:

- una prohibición contra la posesión o la portación de armas o municiones.
- una prohibición contra la participación en operaciones militares.
- El no ofrecimiento de apoyo logístico o inteligencia a ninguna de las partes en el conflicto.
- No solicitar apoyo a los grupos armados, ya sea para la resolución de conflictos personales o familiares o para el desarrollo de la comunidad.

Dada la importancia de la inteligencia que reunía a todos los grupos armados, la limitación de proveer información era un componente esencial de la neutralidad de la comunidad. La limitación contra el apoyo logístico llegó tan lejos como la negativa de vender refrescos a combatientes que visitaran los pequeños comercios de la comunidad.

El problema de las “vistas” de los combatientes, u otros actores no deseados.

Uno de los mecanismos de protección que estableció la comunidad fue un sistema de vigilancia para controlar el acceso a la comunidad de aquellos que no poseían derechos para ingresar. Lograr tal control ha sido críticamente importante, pero difícil de alcanzar, y ha costado una gran inversión de recursos de la comunidad, con resultados inmensurables. En primer lugar, el territorio es muy extenso, alejado y montañoso. Con la excepción del centro de la ciudad de San José, el resto de las aldeas en el municipio se encuentran en las montañas a más de una hora a pie – algunas a más de un día de caminata. La Declaración de la Comunidad de Paz abarcaba al municipio en su totalidad, especialmente ya que existía el deseo de facilitar que parte de la población que había sido desplazada de las aldeas periféricas y estaban residiendo en el centro de la ciudad, regrese a sus hogares. Sin embargo las realidades físicas ocasionaron que el control del acceso fuera solamente en el centro de la ciudad y en la aldea más próxima, La Unión, mientras que el resto de la región estaba constantemente sujeto a la presencia de combatientes, dependiendo del fluir y refluir del conflicto. La serranía de Abibe se mantuvo como paso para la guerrilla, y como escenario de operaciones militares.

“Visitantes no deseados”

En cuanto a los “visitantes no deseados”, en principio se refería a personas extrañas vestidas de civil que podrían estar ingresando al territorio con el objetivo de reunir información para una de las partes armadas. Debido a que la mayoría de los pobladores de la montaña se conocían entre si muy bien, y esa clase de visitantes solía venir por el camino principal desde Apartadó, la comunidad asumía que tales visitantes podría ser informantes de los paramilitares o del ejército. En varias ocasiones, estos visitantes eran invitados a dejar el pueblo.

Presencia de las Fuerzas Armadas Colombianas

La estrategia de la comunidad tuvo dos estadios con respecto a la presencia del ejército. Los primeros 5 años, desde la fundación de la comunidad de paz hasta el 2002, la comunidad presionaba continuamente todo ingreso del ejército al pueblo, no así durante operaciones militares, ni cuando tuviera el propósito de escoltar funcionarios del gobierno como por ejemplo funcionarios del Departamento de Justicia de visita en la comunidad. Esta exigencia resultó exasperante para la Brigada 17 del ejército, que sostuvo que ninguna parte del territorio nacional puede ser restringido a las fuerzas armadas. Durante ese periodo, la comunidad sufrió varios ataques y masacres paramilitares, que se acuso fueron llevadas a cabo en complicidad con la

Brigada 17. El ejército nunca respondió para proteger a la comunidad, aún cuando hubo una advertencia significativa del ataque inminente.

La cerca

Un desarrollo interesante durante este periodo fue la construcción de una pequeña cerca de lo largo del perímetro del territorio. Era totalmente simbólica, aunque claramente delimitaba el territorio de la comunidad. Aun cuando el ejército formalmente acordara no mantener una presencia en la comunidad, hacia notar su presencia en esta cerca. Como una forma de presión o provocación, los soldados cruzarían la cerca y se acomodarían para tomar un descanso, y se irían recién cuando la comunidad hubiera organizado la llegada de una delegación formal para protestar por su presencia. La táctica de la cerca perimetral simbólica fue luego utilizada por la comunidad Cacarica.

El ultimátum de auto desplazamiento

Alrededor del 2002, como la comunidad enfrentaba condiciones de seguridad muy precarias, surgió un segundo acercamiento estratégico con el ejército, aunque el cambio no se declaró formalmente. Esto implicó el compromiso a permitir que el ejército pase a través de la comunidad, siempre que no permanezca. Este cambio reconoció la ubicación de la comunidad como de paso público, y permitió al ejército que procediera hasta el otro lado, aunque el paso pudiera tener el propósito de llevar a cabo operaciones militares.

Este cambio, sin embargo, fue también acompañado de un ultimátum al ejército. Ante amenazas repetidas de que el ejército tenía intenciones de desarrollar una residencia permanente en el centro del pueblo de San José, en una de las asambleas la comunidad declaró que si esto llegaba a ocurrir, la población entera del centro del pueblo se desplazaría inmediatamente a La Unión en forma indefinida. Los residentes de La Unión también declararon la misma intención – que se auto-desplazarían al centro de la ciudad si el ejército se instalaba en La Unión. En nuestras encuestas, uno de los líderes expuso: “Si ellos quieren el pueblo, lo tendrán, pero *sin nosotros*. No seremos víctimas de sus combates en nuestra tierra cuando los otros atacan” Esto no era una mera postura, como los líderes insistieron que la comunidad entera se había empeñado en esta instancia, que garantizaba que si era necesario se implementaría el ultimátum.

Este ultimátum podría parecer un poco ilógico, ya que el objetivo fundamental de la estrategia de comunidad de paz era prevenir el desplazamiento. Pero ellos estaban contando con la falta de voluntad del gobierno de lidiar con la protesta internacional que se desataría si la comunidad entera de San José era desplazada a la vez. La estrategia de “auto-desplazamiento” fue respaldada por las medidas económicas que la comunidad había tomado ante las constantes presiones y bloqueos económicos – mediante el desarrollo de la producción autosustentable de alimentos y reservas de alimentos fácilmente transportables.

Cuando se les preguntó acerca de los riesgos de tal estrategia, los miembros del consejo directivo respondieron que estaban preparados para mantener un desplazamiento a largo plazo si fuera necesario y que habían hecho preparativos para la supervivencia. Sus preocupaciones principales giraban en torno a la posible destrucción de sus inversiones agrícolas en curso, como los molinos, así como la preocupación de que ante la ausencia de testigos el ejército plante pruebas que luego sean utilizadas en contra de los líderes de la comunidad (por ejemplo incriminarlos con almacenar armas). Para minimizar estos riesgos, la estrategia de la comunidad sería la de

convocar a instituciones nacionales e internacionales que los estaban acompañando o que seguían el proceso, y poseían una delegación externa para verificar las condiciones en las cuales la comunidad dejó su propiedad, por lo que quien sea que lo ocupe luego sería legalmente responsable de las condiciones de la propiedad y todo lo que allí se encuentre. Los líderes comunitarios no podían predecir que sucedería luego, como tampoco proyectar escenarios a largo plazo. Pero dada su traumática historia de sufrimiento, se debe asumir que un ultimátum tan sacrificado como este no es falsa jactancia, sino una posibilidad plausible.

La presencia de la guerrilla, probando la neutralidad

La comunidad del mismo modo se opuso a las incursiones por parte de la guerrilla. Era crucial demostrar credibilidad en este aspecto a nivel nacional e internacional. Desde el comienzo ellos solicitaron una presencia permanente en el territorio de instituciones nacionales e internacionales, para monitorear y por lo tanto demostrar su compromiso de neutralidad. Peace Brigades International ha mantenido una presencia permanente en la comunidad al igual que otros grupos como Fellowship of Reconciliation también ha mantenido una presencia temporaria. Con el paso del tiempo, la comunidad también solicitó la instalación permanente de una delegación de la Defensoría del Pueblo del Estado, aunque sin éxito (la Defensoría sostuvo que sus oficinas en Apartadó eran lo suficientemente cerca como para cubrir San José. Del mismo modo, la comunidad solicitó un delegado permanente de la Oficina Presidencial de Recursos Humanos, que también fue denegada alegando recursos limitados. En cambio, la comunidad rechazó la idea hipotética de permitir el establecimiento de una estación de policía en el centro de la ciudad, sosteniendo que la policía estaba armada y por lo tanto posee una función "militar" debido a la realidad que son objetivo de la guerrilla y deben defenderse contra los ataques – consecuentemente la presencia de la policía comprometería la neutralidad que buscaba la comunidad.

Utilización del Tribunal Interamericano

En base a una petición presentada por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Tribunal Interamericano en diciembre de 1997 autorizó/exigió que el estado tomara medidas preventivas para la protección de la comunidad de San José, incluyendo a todos sus habitantes, y asimismo exigió que el estado asegurara la seguridad del territorio físico. En el 2000 la corte emitió una nueva resolución que incluía las medidas provisionales que exigían la investigación de los ataques contra la comunidad, y la protección del regreso de los residentes desplazados. Además, hizo un llamamiento al estado para que "permita a los solicitantes participar en el planeamiento e implementación de las medidas y, en geral, que los mantenga informados del progreso alcanzado con respecto a las medidas ordenadas por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Con este fallo, el tribunal reconoció que la presencia de las fuerzas armadas en la comunidad intrínsecamente representaba para los civiles una amenaza de ataques de represalia por parte de otros actores armados. El fallo abrió un espacio para que la comunidad participara en el debate de las medidas sobre su propia seguridad. Este proceso fue luego replicado en al menos otros seis casos que involucran a comunidades en Colombia.

No estamos al tanto de ninguna otra medida de un tribunal internacional u organización gubernamental internacional que intentara de esta forma proteger una comunidad territorial y como tal este desarrollo en Colombia ha captado la atención transversal del estudio STEPS.

Ataques contra la Comunidad de Paz de San José

La primera incursión armada ocurrió a penas 5 días después de la Declaración de la Comunidad de Paz. Desde ese momento, han habido al menos 10 ataques o incursiones serias, mas frecuentemente por operaciones paramilitares. Además, en el periodo inicial la FARC ejecutó a varias personas, incluyendo un líder historio y muy respetado de la comunidad. Entonces fue evidente que desde el comienzo ninguno de los actores armados presentes en la región estaba feliz con el proyecto estratégico de esta comunidad.

Mirando atrás ahora con un poco de perspectiva, ha habido una clara evolución de los ataques paramilitares contra San José. En el comienzo cada incursión tuvo como consecuencia varios miembros de la comunidad asesinados y tuvo como resultado una reacción enérgica por parte de la comunidad y de sus partidarios nacionales e internacionales. La comunidad le dió mucha importancia al acompañamiento externo y otros aliados internacionales por su capacidad de generar una protesta política rápida y efectiva. Estas protestas invariablemente responsabilizaban a la cercana Brigada 17 y su comandante, ya sea ellos mismos como participantes de las incursiones, o por la falta de repuestas a llamadas de auxilio realizadas por la comunidad. Existen numerosos testimonios de residentes que reconocieron a los soldados involucrado en los ataques “paramilitares”, a veces por percibir las insignias de la Brigada 17 en sus vestimentas o por notar que en un caso a penas 20 minutos después de un ataque militar, la Brigada 17 se aproxima por el mismo camino por el que recién han salido los paramilitares.

Cada comandante sucesivo de la Brigada 17 ha tenido que enfrentar una batalla política con la comunidad de paz, y ha sido obligado a responder por acusaciones, al punto tal de tener que enfrentar a los medios por si mismos.

Después de un cierto punto estos ataques paramilitares nocturnos no dejaron victimas entre los miembros de la comunidad de paz, en cambio se limitaron a causar daños materiales significativos. En un caso incendiaron hogares, amenazando a la gente y disparando al aire. En otra ocasión, el ataque apuntaba directamente y asesinó a varios pequeños comerciantes que operaban en la comunidad, pero que no eran, formalmente, miembros de la comunidad de paz. En este incidente, uno de los líderes de la comunidad de paz trató de escapar de un ataque saltando desde un balcón. Uno de los atacantes, que lo reconoció, que no se molestara en correr, en ese momento él no era su objetivo. Ello era una clara prueba del planeamiento y cálculo de las victimas, basándose en macabros análisis costo beneficio político por parte de los organizadores. Luego de este ataque, no hubo más incursiones nocturnas.

Sin embargo, la presión no se detuvo, sino que fue transferida a otros sitios, como el camino de acceso a San José. Hubo entonces un aumento de los bloqueos de rutas por parte de los paramilitares - a menudo ubicados solamente a unos pocos cientos de metros de los bloqueos militares formales. Estos bloqueos de rutas, como lo notamos en el Medio Atrato, limitaban la movilidad y el transporte de bienes, causando penurias a la comunidad. Asimismo, las cargas de los camiones con bienes de la comunidad destinados al mercado eran robados en las rutas. Hubo un momento en el 2002 en el que los paramilitares estaban evitando todo el trafico vehicular hacia y desde la comunidad, hasta asesinando a los conductores de los micros o camionetas que transportaban personas o bienes para San José. Durante este intenso bloqueo, los únicos vehículos a los cuales se les permitía pasar son inconvenientes eras los autos de Peace Brigades

International y de la Diócesis de Apartadó, nuevamente sugiriendo un cuidadoso calculo costo beneficio político. Mediante respuestas con protestas contra este bloqueo económico, la Brigada 17 tomó fotos aéreas pretendiendo demostrar que estos vehículos estaban transportando bienes para la FARC. La comunidad respondió que estos eran productos agrícolas de su pertenencia, y que no tenían inconveniente que se lo monitoreara o que viajaran observadores en los vehículos a fin de comprobarlo.

El bloqueo económico fue devastador para la comunidad, que no estaba preparada para ello. Ante la desesperante falta de bienes, la asamblea de la comunidad tomó la decisión de marchar en masa hacia Apartadó para comprar bienes y regresar con ellos en grandes grupos. Pero esto no fue necesario, porque la Diócesis finalmente, rompió el bloqueo ejerciendo presión e intervención directa: el obispo de Apartadó en persona acompañó varias cargas de productos básicos hasta San José. Luego se mantuvo el bloque de forma menos estricta, y la comunidad comenzó a desarrollar mejores estrategias de autosuficiencia.

Estrategias de Seguridad Específicas

La comunidad ideó varias estrategias defensivas para sobrevivir bajo amenaza, como por ejemplo:

- Siempre salir en grupos para trabajar la tierra o para viajar por las rutas.
- Informar todas las salidas y regresos a la comunidad, especialmente de los miembros del consejo de la comunidad u otras personas que enfrentaban riesgos particulares.
- Al comienzo instalaron una campana en una ubicación estratégica en cada comunidad, y esta alarma se hacía sonar si se sospechaba de una incursión. La señal convocaría a toda la población a congregarse en la plaza y enfrentar la incursión con la fuerza moral de los números. Si alguien preguntaba por sus líderes, la respuesta colectiva sería negarse a identificarlos. La alarma no resultó efectiva en algunos casos cuando los paramilitares ingresaron demasiado rápido, en estilo comando con disparos múltiples. Luego de varios asesinatos y continuas amenazas de muerte, la campana de alarma en cambio se convirtió en una señal para abandonar el centro de la ciudad y esconderse en las montañas hasta que los atacantes se hubieran ido.

Respaldo Externo

El respaldo externo fue siempre un pilar de la estrategia de la comunidad, y demostró ser un punto fundamental. Toda la mística de una "Comunidad de Paz" se adaptaba perfectamente a la imaginación occidental y desde el comienzo logró un amplio respaldo internacional. Tal apoyo incluía:

- las medidas preventivas del Tribunal Interamericano.
- campañas de solidaridad internacional de "comunidades hermanas"
- varios esfuerzos de representación que originaron cartas de respaldo de miembros del Congreso de los Estados Unidos y otras figuras políticas, y hasta produjo delegaciones personales y visitas a la comunidad por parte de partidarios influyentes.
- Proyecto de desarrollos y humanitarios respaldando la autosuficiencia de la comunidad.
- Sin duda, la presencia de PBI y de otros acompañamientos internacionales tenía un impacto protector. En un número de ocasiones los miembros del ejercito amenazaron a la comunidad que "esa gente de PBI no iba a estar siempre allí". PBI confirmó este impacto en reuniones con los varios y cambiantes comandantes de la Brigada 17.

Observaciones generales de las estrategias de la Comunidad de Paz San José.

San José de Apartadó todavía ocupa la misma ubicación estratégica que tenía en los 90s, con la presencia de la FARC en lo alto de las montañas. De ese modo, el ejército y los paramilitares permanecieron atentos, considerándolos no como un enemigo fuerte, sino como un paso vital al que ellos no deseaban renunciar. La presión se focaliza en las autopista que conduce al pueblo.

Desde la creación de la Comunidad de Paz en 1997 se registraron más de 60 asesinatos de residentes de San José. La intimidación constante ha provocado que muchas familias se fueran de la comunidad con el paso del tiempo, sin embargo no ha socavado la permanencia general de la comunidad y su estrategia. Al menos la mitad de la comunidad permanece en el territorio. Claramente, este hecho es una señal de fortaleza y de debilidad., Una parte significativa de la comunidad se ha ido, lo que sugiere un éxito limitado de la estrategia. Sin embargo el hecho de que la comunidad misma permanezca intacta con su estrategia es un éxito, teniendo en cuenta los intentos de destruirla. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? La respuesta debe tomar en cuenta que Colombia tiene más de 2 millones de desplazados, y que esta región - y esta comunidad en particular- han sido blanco para el desplazamiento.

El hecho de que el proyecto de la comunidad siguiera vivo a pesar de tales presiones sugiere los residentes que permanecieron perciben cierto nivel de seguridad en la estrategia de la unidad, y confían en su capacidad de autosuficiencia económica. Hay también orgullo en el sentido de propiedad y conexión con su tierra, y en el compromiso de participar activamente en su comunidad.²¹ Estos factores aparentemente primaron sobre el miedo y la estigmatización generada por los ataques y el hostigamiento.

Lo más importante, quizás, es como los miembros de la comunidad no dudarían en expresarse, es el concepto de dignidad – su compromiso al derecho de todo colombiano a no ser expulsado de su tierra ni atacado por permanecer en ella. Esta percepción de dignidad colectiva es indudablemente un factor clave para mantener la unión de la comunidad frente a tantos desafíos.

Otras experiencias comunitarias relacionadas

Otras comunidades en la región lanzaron estrategias similares luego de sufrir la devastación del desplazamiento forzado a fines de los 90. Luego de la Operación Génesis y el recrudecimiento del conflicto, miles de campesinos de Río Sucio y Carmen del Darien (Bajo Atrato, Chocó) huyeron de sus hogares. Más de 5000 acabaron en miserables condiciones de refugiados en Pavarando. Aquí se organizaron, conjuntamente con la iglesia y las ONGs, para negociar con el gobierno para garantizar un regreso seguro a su territorio. El 19 de octubre de 1997 establecieron la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís. En 1998 y 1999 las comunidades cercanas Paz Natividad de María y Nuestra Señora del Carmen se unieron con San Francisco como comunidades de paz.

Durante esos mismos años, otro grupo de varios cientos de refugiados estaban organizando en el coliseo de la ciudad de Turbo, donde estaban anclados desde Marzo de 1997. Habían huido de sus comunidades del Río Cacarica, ubicada al norte del Río Atrato hasta la frontera con Panamá. Pasaron tres años en Turbo – sufriendo hambre y privaciones, enfrentando amenazas paramilitares en forma continua, presionados en tortuosas negociaciones con el gobierno, y organizando un frente unido para regresar a sus hogares con dignidad. Finalmente en el 2000, lo

refugiados de Turbo conjuntamente con otros Carcaricanos desplazados de otras partes del país regresaron para establecer las comunidades de Nueva Vida y Esperanza en Dios – cerca de 4000 personas todas juntas. Estas comunidades eligieron no usar la etiqueta de “comunidad de paz”, en cambio se denominaron a si mismos "comunidad de autodeterminación, vida y dignidad".

Estos campesinos habían todos pasado por experiencias de desplazamiento traumático similares, seguidas de un intenso periodo de coexistencia física en refugios. El amontonamiento de campesinos utilizado en los espacios rural era inhumano, sin embargo tenía el efecto colateral de provocar una intensa organización colectiva. El escenario de los refugiados en Turbo y Pavarando permitió que se realicen reuniones diarias entre personas cuyos caminos rara vez se cruzarían en sus hogares rurales. Esto facilitó el contacto frecuente entre los miembros de la comunidad, los líderes y las organizaciones externas. La crisis de refugiados regional atrajo la atención nacional e internacional.

Los procesos internos de la organización de la comunidad eran fundamentales para cada uno de los procesos de las comunidades de establecerse como "algo diferente". Varios factores contribuyeron con estos procesos de organización intensivos. La región de San José tenía una historia de militancia política de izquierda, mientras que el Bajo Atrato tenía antecedentes de organización étnico comunitaria similar a la del Medio Atrato. Simultáneamente con el proceso de regreso de los campos de refugiados, estos habitantes estaban legalizando sus títulos de propiedad colectivos (todos excepto San José, que no es afro -colombiana y por lo tanto no se encontraba dentro del alcance de la Ley 70), lo que fortaleció aun más a las comunidades.

Todos estos procesos contaban con el acompañamiento de partes externas. Nacionalmente, esto incluía especialmente a la Diócesis de Apartado, la Comisión de Paz y Justicia, y CINEP entre otros. Cada una operó/opera con una metodología, intensidad y tiempo diferentes. Algunos adjudican mayor prioridad o presencia física y visitas regulares, un factor muy importante para la comunidad. Algunos pusieron énfasis en los talleres para desarrollar capacidades, algunos centrados diplomacia política del más alto nivel. Es notable que todos estos grupos poseen una relación directa o indirecta con la Iglesia, y las comunidades fueron testigos de toda la gama de acercamientos basados en la Iglesia, desde la solidaridad popular mas cerca de la teología de la liberación a las tradiciones más paternalistas de la iglesia en Latinoamérica.

Otra diferencia en estos procesos han sido el alcance y el estilo de las negociaciones con el Estado e instituciones gubernamentales. Las Comunidades de San Francisco de Asís y las demás comunidades del Bajo Atrato tuvieron una breve negociación con el Gobierno para facilitar su regreso luego de haber sido desplazados, y obtuvieron algo de respaldo como herramientas, semillas etc. Por el contrario, las comunidades de Cacarica tuvieron que posponer su regreso hasta que luego de extensas y penosas negociaciones y presiones ellos lograron un compromiso específico por parte del Gobierno, que incluye la creación de una Comisión Mixta de Verificación (con funcionarios del gobierno, representantes de las UN, un cuerpo diplomático y ONG como PBI). San José de Apartadó ha también mantenido un nivel sostenido de negociación y confrontación con los funcionarios del Gobierno.

Internacionalmente, Peace Brigades International mantuvo (y todavía mantiene) una presencia permanente en San José y en Cacarica y tuvieron presencia en San Francisco de Asís al

comienzo del periodo. Otros grupos solidarios internacionales, como Fellowship of Reconciliation con sede en los Estados Unidos y Colombia Support Network, han enviado voluntarios en forma esporádica para que permanezcan en San José mientras se mantiene la presión política desde el exterior. El Comité Internacional de la Cruz Roja y ACNUR asimismo han visitado estas comunidades periódicamente.

Estas comunidades reestablecieron su propio control sobre su territorio, y en este proceso afrontaron las mismas fuerzas económicas y políticas que los habían expulsado años antes. En realidad, los “expulsadotes” habían sido forzados a aceptar estos regresos. Los tiempos ha cambiado, la presión internacional es una fuerza significativa, y las partes armadas y económicas están buscando alcanzar sus objetivos a través de estrategias brutales menos descaradas.

LA FARC se ha retirado de la mayoría de las áreas de estas comunidades, y no hay un control paramilitar total cercano alrededor de ellas. Estas comunidades enfrentan constantes invasiones y presiones, especialmente para que se involucren en negocios agrícolas controlados externamente de cocaína y Aceite de Palma Africana. La gente de Jiguamiando están resistiendo firmemente estas presiones, debido a su ubicación más aislada enfrentan fuertes presiones militares, con menor publicidad externa.

En Cacarica hay dos comunidades fuertes y estrechamente unidas, con activo acompañamiento nacional e internacional, y su resistencia a las presiones para ceder el control económico de su territorio obtiene bastante publicidad. Se han convertido en algo así como un símbolo de la resistencia. Este “símbolo” es aparentemente una espina para las elites, porque los grandes esfuerzos realizados para desestabilizar a estas comunidades parecen completamente descompensados con la importancia real económica o militar de sus tierras. Cacarica esta compuesta por dos pequeños pueblos de 3500-4000 personas, y han delimitado su territorio con una cerca de alambres de púas – tres líneas de cables en postes. Cultivan alimentos básicos para el consumo, con una pequeña parte de la producción destinada a la venta. No hay presencia de la guerrilla cerca de ellos, como lo demuestra el pequeño batallón del ejército en el área.

Estos 100 soldados, sin embargo, se dedican a observar y hostigar a estas dos pequeñas comunidades, utilizando métodos de guerra psicológica que han sido documentados por la ONG Justicia y Paz y por las mismas comunidades. En agosto 2003, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Colombianas, General Mora Rangel, convocó una conferencia de prensa en Bogotá con el único motivo de denunciar el “campo de concentración” de la FARC en Cacarica.

Estoes descaradamente grotesco, sin embargo cuando se toma en cuenta que Cacarica es un par de pequeñas aldeas con importancia militar menor, es sorprendente que los máximos oficiales militares de la nación le atribuyan tal importancia política como para otorgarle su propia conferencia de prensa. El ejército también publicó su punto de vista con respecto a Cacarica en un artículo del Wall Street Journal en noviembre 2003.

Todo esto sugiere que ellos consideran a estas comunidades experimentos extremadamente importantes, quizás porque demuestran que existen alternativas a ceder el control completo de sus territorios a las elites económicas que los desean.

La magnitud de los intentos públicos de militares de primer nivel para deslegitimarlos, combinado con las inversiones del ejercito/paramilitares en la desestabilización psicológica y económica deliberada, sugiere que estos campesinos, con nada para defenderse más que su dignidad, su coraje, redes de solidaridad y el amor por su tierra, los están inquietando.

Tercera Parte: Cauca

Introducción

El departamento de Cauca, como Chocó, posee ciertas características únicas en términos de diversidad étnica y organización popular que la convierte en un territorio promisorio para un estudio “regional” desde la perspectiva del estudio de STOPS. Al igual que en Chocó, vamos a describir algunas de las dinámicas departamentales que han contribuido a promover o provocar respuestas organizacionales alternativas, tanto de las comunidades como de las organizaciones populares de la región. Asimismo vamos a resumir algunos de los experimentos locales específicos con respuestas territoriales alternativas al conflicto.

Aunque notaremos algunas semejanzas con Chocó, las diferencias son aún más pronunciadas. Historia regional, organización étnica, economía, y la longevidad local del conflicto todo se conjuga para producir una realidad muy diferente. Las estrategias locales que respondían a esa realidad son por lo tanto también bastante contrastantes con las de Chocó. Y el potencial de éxito de estas estrategias debe ser analizado en vista de esas dinámicas contextuales contrastantes.

Étnicamente, Cauca es uno de los departamentos con mayor presencia de indígenas en Colombia, con 38% de población indígena, que representan a varios grupos de diferentes culturas e idiomas. La población del departamento es cerca del 60% rural, y dado que los indígenas se concentran principalmente en las áreas rurales, esta población rural sería también la mayoría indígena. El resto de la población es en gran parte mestizo, con un pequeño componente Afro Colombiano.²²

Cauca posee una historia más extensa que la de Chocó. Se ubica directamente al sur de Cali y esta influenciada económica y políticamente por la elite de Cali. Aunque la queja del abandono por parte del estado se hacia sentir aquí también, Cauca no había sido abandonada por las elites económicas, y ha experimentado muchas olas históricas de desarrollo/explotación, mayormente en los agro negocios, y mas recientemente la producción de coca con una expansión considerable.

Las montañas del Macizo en Cauca son legendarias en la historia de la guerra Colombina por haber sido hogar, escondite, y teatro de operaciones de varios movimientos guerrilleros por décadas. Partes sustanciales del departamento son históricamente consideradas “territorio del ELN” o “territorio de la FARC” o ambos, y una de las promesas de campaña del Presidente Uribe fue ‘recuperar el Macizo’. La frontera sur corresponde al departamento de Putumayo, que era fortaleza de la FARC y zona de despeje durante la última ronda de negociaciones de paz.²³

En décadas recientes, los movimientos sociales han jugado un papel político importante en Cauca. Algunas de las organizaciones sociales más importantes (sindicatos, movimientos de campesinos y organizaciones indígenas) poseen una historia de varias décadas de lucha y desarrollo estratégico y organizacional y esta historia les ha dado la

experiencia para tratar en forma directa con todos los actores armados en la guerra, y con las elites económicas también.

En los 90s, las organizaciones sociales en Cauca se unieron varias veces para protestar por el incumplimiento del estado de prestar servicios o desarrollo. Estas protestas involucraron la desobediencia civil masiva de gran duración, en la cual decenas de miles de personas tomaron (y bloquearon) la autopista Panamericana, cerrando el comercio para la región del sur y bloqueando el acceso a la ruta entre las ciudades más importantes de Colombia más al norte (Bogotá, Medellín y Cali) y el resto de America del Sur. Estas movilizaciones en 1991, 1996 y 1999 fueron los suficientemente paralizantes para forzar al estado a que enviara representantes desde Bogotá para negociar acerca de las exigencias de los protestantes. Sin embargo, en cada caso, el estado negoció acuerdo que luego repentinamente incumplió una vez que se terminaron las protestas.

La última movilización en 1999 ocasionó la formación del Bloque Social Alternativo, un cuerpo actual que continuó presionando para que el estado cumpliera con las exigencias populares. Una parte importante del Bloque Social Alternativo también decidió que el poder de este movimiento social debía aplicarse en la escena electoral y en el 2000 un candidato indígena "alternativo", Floro Tunubalan, fue electo gobernador con el respaldo del Bloque.

Luego de la movilización del 1999 y la elección de Floro en el 2000, las AUC (la organización paramilitar más grande de Colombia) inició una invasión generalizada de todo el departamento, moviéndose rápidamente al sur desde Cali. Cauca ha pasado por numerosas experiencias paramilitares diferentes en el pasado, pero esta fue la incursión más importante de todas, y la primera vez que las AUC habían intentado directamente controlar el departamento. La mayoría de las personas que entrevistamos interpretaron este violento ataque como una respuesta política ya sea a las movilizaciones o a la elección de Floro, en otras palabras, que fue un claro intento de “bajar” un movimiento social alternativo que estaba rindiendo frutos, y para prevenir que tales movimientos volvieran a dañar los intereses económicos de las elites mediante el cierre de la autopista. Sin embargo, dada la significativa producción de coca en el departamento, y dado que la presencia de la FARC en el sur, había sin duda una mezcla de motivaciones económicas y militares detrás de la estrategia de las AUC.

Las AUC se movieron rápidamente, combinando tácticas de terror y cooptación. Los años 2000-2002 fueron testigos de un número de masacres en Cauca. La opinión frecuente entre los entrevistados, aunque, fue después de la primera ola de aterradora violencia militar, fue que las AUC habían elegido un acercamiento más “prudente”. Ha logrado tomar control de la autopista y los pueblos principales, y en la mayoría de los casos evitaron las áreas montañosas, que eran mayormente indígena. Las personas entrevistadas repetidamente mencionaron que parecía que las AUC estaban intentando “colonizar” el área en lugar de puramente atemorizar, por medio del desplazamiento de personas para luego instalarse con su familias enteras, y por involucrase en relaciones con mujeres locales.

Situación Actual

No se han realizado movilizaciones sociales masivas en Cauca desde 1999. Algunos lo atribuyen que es por miedo a los paramilitares. Otros mencionan el factor “Floro” – el hecho de que una parte significativa de la coalición estaba contando con la estrategia del gobierno de Floro y por ende estaba deteniendo las movilizaciones populares durante este periodo.

Sin embargo, se detectó un alto grado de desempoderamiento entre aquellas personas con quien nos encontramos. Muchas personas estaban desilusionadas con Floro, y sentían que el no había logrado mucho para la gente, y que había tomado decisiones sumamente discutibles - como la de invitar al ejército a que instale una “Brigada Móvil” especial en el departamento. Se hicieron numerosas referencias a divisiones dentro del movimiento, y algo de desconfianza entre los sectores de indígenas y campesinos.²⁵ Entre las organizaciones campesinas se detectó un claro sentido de que no tuvieron una estrategia política efectiva para resistir la invasión paramilitar.

A pesar de que el departamento cuenta con una sorprendente historia de movilizaciones masivas, la mayoría de los entrevistados se centró principalmente en las estrategias locales de las comunidades pequeñas. Estas estrategias eran principalmente a largo plazo en su visión, y no se orientaban a enfrentar el conflicto o a los actores armados en forma inmediata. Sin embargo, dentro de esta visión, encontramos un análisis profundo de lo que implica, a largo plazo, para las comunidades enfrentar el conflicto, y un cierto reconocimiento humilde de que ellos podrían no obtener lo necesario ahora, y que necesitaban trabajar localmente en el fortalecimiento de sus comunidades.

Fue sorprendente, ante un ataque paramilitar importante, comprobar que la mayor parte del tiempo la pasamos discutiendo proyectos destinados a la autosuficiencia de la comunidad, sin embargo la guerra de Colombia es una guerra de economía política: se entrelazan motivos militares y económicos, y por lo tanto para las comunidades, las vulnerabilidades económicas están directamente relacionadas con vulnerabilidades de seguridad física. Como en Chocó, la defensa del territorio se considera conectada a procesos colectivos basados en la comunidad, tanto económicos como políticos.

Las comunidades indígenas y las comunidades de campesinos colaboran en estrategias a nivel regional a través de las organizaciones más importantes, pero se organizan separadamente. Dentro de ambos subgrupos, hay múltiples organizaciones y estrategias, con varios niveles de lucha de poder y competencia entre ellos, como es costumbre en movimiento civiles masivos.

Reservas Indígenas

Las áreas indígenas establecidas legalmente, o comunidades se conocen como: reservas.²⁶ Existen docenas de reservas en Cauca, la mayoría ubicadas en las montañas, y son gobernadas en forma autónoma - cada una elige sus líderes dentro de la comunidad. Las reservas son asimismo representadas como miembros de dos cuerpos representativo importantes:²⁷

- a) El CRIC Consejo Rural Indígena Cauca representa a la mayoría de las reservas de Cauca.
- b) AICO *Autoridades Indígenas de Colombia* representan a varias otras reservas de Cauca. AICO es una organización indígena nacional que también representa a grupos indígenas en Nariño, Caldas, Putumayo y Huila.

El liderazgo del CRIC describió su estrategia con respecto al conflicto a través de tres líneas: Control Territorial, Autonomía/Autoridad y Derechos Humanos. Es importante tener en cuenta que nuestra entrevista tuvo lugar en el medio de un evento controversial y conflictivo – el rescate realizado por una comunidad indígena en Cauca de un ciudadano suizo, Florian Arnold, de un intento de secuestro por parte de la FARC. Este rescate estuvo en la primera plana nacional cuando llegamos a Cauca, y el gobierno Colombiano estaba aprovechando la propaganda de tal evento.

Los líderes del CRIC describieron los métodos de defensa de su territorio como estrategias trilladas practicadas por cientos de años.

La resistencia civil que el gobierno está alentando tanto no es nada nuevo. Siempre ha estado aquí. Es parte de nosotros. Todos los actores armados se disputan nuestro territorio y nuestra autonomía. Enfrentamos ataques de la guerrilla, y enfrentamos la tiranía del estado. Cada vez que el estado hace notar su presencia en nuestro territorio, es para lastimarnos solamente, nunca para ayudarnos. Es siempre militar. Además, las políticas del estado se contradicen directamente con nuestra autonomía.

Tanto el ejército como la FARC están perversamente presionando el mismo resultado: forzar que la gente se retire de sus tierras. Luego de la Masacre del Naya²⁸ por los paramilitares, la FARC también estaba alentando a la gente a que se fueran y no regresaran.

Y de acuerdo con el representante de AICO:

“Somos neutrales y autónomos ante todos los grupos armados. Cuando nos amenazan con armas, tenemos que demostrar nuestra humildad y defender nuestro territorio sin usar la fuerza, a través del diálogo. Es una lucha convencer a otros acerca de lo que significa para nosotros “ser diferentes”.

Vamos a detenernos en algunas de sus estrategias específicas respecto de cada actor armado:

Estrategias hacia la guerrilla

Los representantes indígenas con quienes conversamos aludieron a una longeva historia de conflicto con la guerrilla. Los grupos guerrilleros se han estado moviendo en estas montañas por décadas, a atravesando y viviendo en territorios indígenas. Los grupos guerrilleros no son indígenas, y no parecen ser percibidos por los indígenas como un aliado.²⁹ Asimismo, la FARC en particular tiene una reputación de ser extremadamente autoritaria y militar en su acercamiento con las comunidades, y por lo tanto no es particularmente respetuosa del compromiso de las comunidades indígenas con la autonomía y el autogobierno. Nuestra entrevista con el CRIC se inició con un discurso

vehemente que negaba a la FARC la legitimidad del rótulo de ser un “ejército de la gente”.

Y de acuerdo con el representante de AICO:

Teníamos la posición para exigir que los grupos armados ni siquiera pasen a través de nuestro territorio. Al principio lo respetaron. Sin embargo, ahora no. Esto no funciona. No se los puede monitorear y tampoco se los puede parar... Parece que ya no respetan la resistencia no violenta. En Silvia, por ejemplo, la FARC llevó a cabo un ataque dentro de una reserva.

El CRIC también mencionó la imposibilidad de controlar los movimientos de la guerrilla en territorio indígena, dado que la guerrilla ha estado cohabitando en esas montañas con ellos por décadas. Sin embargo ellos recalcaron la necesidad de negociar exigencias y restricciones respecto del comportamiento.

“No les permitimos que traigan víctimas secuestradas a través de nuestro territorio. Como tampoco les permitimos pasar con vehículos robados. Nosotros no podemos, por supuesto, evitar que pasen”

Aparentemente, la FARC está abierta a negociar con las comunidades, aunque la insistencia en tales negociaciones parece requerir que las comunidades entren en acción. El gobernador de la reserva Pioya describió lo siguiente:

Las comunidades de Pioya y Tambalo están bastante cerca, pero el terreno es extremadamente difícil, y por mucho tiempo no hubo camino directo. La única forma de llegar allí era mediante un largo desvío a través de Silvia,. La comunidad le exigió al estado que construyera una ruta pero esto nunca ocurrió. Finalmente, construimos el camino nosotros mismos. Si miran la construcción podrán comprobar que fue construida por la comunidad con materiales locales y sin ningún equipamiento pesado.

Cuando la ruta estuvo terminada, la FARC tomó control de esta. Los vehículos de la FARC estaban constantemente acelerando y retrocediendo a altas velocidades e intimidando a los otros vehículos. Protestamos – sin resultados. Entonces un día, 400 de nosotros salimos y destruimos el camino para que ellos no pudieran usarlo más. Hicimos que la ruta no se pudiera transitar por ambos lados, provocando que 7-8 vehículos de la FARC quedaran varados en la mitad del camino. Este hecho finalmente permitió que tuviéramos una negociación más seria, y pudimos abrir la ruta nuevamente y usarla nosotros mismos.

El Rescate de Florian Arnold

Florian Arnold es un ciudadano suizo que ha estado viviendo y se ha dedicado a la agricultura en la comunidad campesina no indígena de Caldon, Cauca por 26 años. Asimismo él dirigió una pequeña ONG que apoyaba proyectos de desarrollo para la comunidad local. El primero de julio de 2003, una patrulla de la FARC con cuatro hombres armados ingresó a su hogar, lo secuestró, lo pusieron en un vehículo, lo llevaron a las montañas, pasando por la reserva de Pioya. Según el gobernador indígena de Pioya:

Cuando ellos venían atravesando nuestro territorio, nosotros lo sabíamos enseguida. Como utilizaban un vehículo, era bastante sencillo bloquearles el camino, y forzarlos a tomar el camino que va directo a través del pueblo. Luego utilizamos otro vehículo para bloquearles el camino, por lo tanto tenían que detenerse. Insistimos en que pasaran la noche en el pueblo. Durante la noche, avisamos a la comunidad entera y las comunidades vecinas también. Al día siguiente nadie trabajó, todo el mundo se acercó al centro del pueblo donde los teníamos. Cientos de personas. Llegamos allí a las AM.

Los 4 guerrilleros desafortunados estaban completamente rodeados por una multitud con machetes y bastones. Los acorralamos desde muy cerca, de forma tal que no tenía oportunidad de sacar sus armas. Si lo hacían, decíamos “Mátennos a todos” Así estuvimos cuatro horas.

Mientras tanto, las mujeres del pueblo rodearon a Florian, y básicamente los agarraron y sacaron de los guerrilleros.

Luego iniciamos un dialogo con ellos. Ellos acordaron que probablemente habían cometido un error, pero insistían que ellos tenían ordenes que debían llevar a cabo. Le dijimos “OK, dígame a su comandante que venga aquí, a nuestra aldea y nosotros hablaremos con él”.

Más tarde esa mañana, llegó el Defensor³⁰. Para pacificar a la guerrilla, ofreció subir a la montaña con el capitán para tratar de ubicar a su comandante por teléfono. Lo dejamos ir. Luego les llevó tres horas realizar el llamado – lo que no resultó bastante sospechoso. Sin embargo ellos regresaron, con el permiso del comandante para admitir que había cometido un error y para poder liberar oficialmente a Florian a pesar de que ya lo habíamos liberado nosotros!

Ex gobernador indígena de la reserva Pioya.

Cuando se les preguntó si temían que las guerrillas pudieran usar sus armas para escapar del rodeo realizado por la comunidad - el riesgo de una masacre los gobernadores de Pioya respondieron que veía que el riesgo era pequeño dado el número de personas que habían convocado. El miedo más importante era que llegara el ejército y que la situación se convirtiera en un combate. Por lo tanto, aunque retuvieron al grupo guerrillero durante la noche, no hicieron una denuncia publica hasta que se resolvió la situación, para no alertar al ejército. El Defensor fue traído con suma confidencialidad.

Este ejemplo demuestra una táctica que ha sido también mencionada por grupos indígenas en Chocó – una confrontación directa en la cual la comunidad entera se congrega y rodea a un grupo armado superándolo en número, exigiendo una negociación. Es una estrategia que solamente se puede utilizar en circunstancias especiales, cuando se presupone que el grupo armado no está dispuesto a llevar a cabo una masacre. Cuando la estrategia resulta un éxito, envía al grupo armado un claro mensaje de que la comunidad está preparada para tomar ciertos riesgos para defender sus exigencias. Los gobernadores de Pioya mencionaron haber utilizado esta estrategia en otras ocasiones también. En una oportunidad, comentaron que resultó efectivo que solamente a las mujeres de la comunidad confrontaran a la FARC.³¹

Los grupos indígenas mencionaron repetidamente que se encuentran entre la espada y la pared. Si enfrentan a un grupo armado, se arriesgan a las represalias. Si colaboran o negocian con un grupo armado, se arriesgan a las represalias del enemigo de ese grupo. Si la FARC establece su presencia cerca de ellos, el ejército y los paramilitares los toman de objetivo. Si el ejército instala un puesto fronterizo, la FARC los toma de objetivo. Esto seguía sucediendo aún durante nuestra conversación: luego del rescate de Florian Arnold, recibieron noticias de que el ejército estaba ingresando en el territorio desde tres rutas diferentes. Estaban muy preocupados de quedar atrapados en el medio del combate entre el ejército y la FARC. Creen que si el ejército se establece en su territorio como resultado de este incidente, van a convertirse en blanco de la FARC.

El ejército, el estado y el alcalde local están manipulando la situación completamente. Intentan que parezca que los indígenas están respaldando al estado. Esto NO es lo que estamos haciendo. Estamos simplemente defendiendo nuestro territorio. Cuando el estado trata de reclamar la autoría de nuestras acciones, están convirtiéndonos en blanco de la FARC.

Estrategias hacia los paramilitares

En verdad, probablemente sea más sencillo enfrentar a la FARC que a los paramilitares. La FARC es más respetuosa. – líder del CRIC

En el 2001 los paramilitares llevaron a cabo una masacre de 56 indígenas en Naya, al noreste de Cauca. Una vez más, el vínculo entre la política y la economía parece desempeñar un papel en el asunto. En general, la invasión de las AUC no se estaba desviando de su camino para atacar comunidad indígena, sin embargo el Río Naya se considera una vía fluvial prometedora para el desarrollo económico futuro de la región y existía un claro interés por parte de las élites de quitar el control del territorio a los indígenas. Después de este ataque, los grupos indígenas organizaron una movilización de protesta importante en Cali. CRIC ONIC³² y el Defensor del Pueblo organizaron una marcha en el 2002 para celebrar que se cumplía un año de la masacre, con el apoyo de la oficina de Gobernadores del Cauca, y para protestar por la presencia en curso de los paramilitares. “Con esta protesta, ganamos algo de “cautela” por parte de los paramilitares”. Naya continúa siendo la única región indígena en el Cauca donde los paramilitares mantuvieron una presencia permanente.

En otras áreas, los paramilitares asesinaron a mucho indígenas y arrojaron los cuerpos en el Río Cauca. Los líderes de CRIC describieron una acción combinada en la cual las comunidades indígenas trabajaron en conjunto para recuperar los cuerpos arrojados al río. Consideraron a este un éxito muy importante que reactivó a la gente. La estrategia paramilitar de arrojar los cuerpos en el río era un ataque directo a su cultura, y a la importancia espiritual que ellos adjudicaban a los rituales de entierro adecuados.

En enero 2002 ocurrió una masacre en Corinto, que dejó siete muertos (3 indígenas y 4 campesinos) Como la invasión paramilitar continuó, los indígenas comenzaron a organizar

Mingas de Seguridad, reuniones de comunidad para discutir y formular estrategias de seguridad para toda la comunidad.

En síntesis, no se deduce de nuestras entrevistas que las comunidades indígenas hubieran tenido contacto frecuente con los paramilitares tanto como con la guerrilla. No habían elegido el mismo nivel de estrategias de negociación y confrontación enérgica con los paramilitares que las que estaban dispuestos a usar con la guerrilla.

Estrategias hacia el Ejército

Los líderes del CRIC se quejaron de que la actitud del ejército es: "Están con nosotros o contra nosotros". Por ejemplo, cuando un líder indígena acusado de colaborar militarmente con los paramilitares, rápidamente fue acusado por los paramilitares de ser parte de la guerrilla.

Reclutamiento

El estado también ha estado intentando atraer a los indígenas a los "soldados campesinos" [milicia de campesinos]. Algunos fueron llevados por la fuerza, y otros mediante sobornos. Sin embargo siempre protestamos y exigimos que sean regresados. Sabemos que si nuestros muchachos son miembros de soldados campesinos, la FARC va a atacar a sus familias. La estrategia del ejército es convertirnos en el objetivo.

Los indígenas en Colombia gozan de derechos específicos con respecto al reclutamiento militar y hay un proceso legislado de "reclamación" por medio del cual los líderes de la comunidad podían demandar que se regrese a una persona indígena reclutada a la comunidad. Los líderes del CRIC contaron una historia acerca de un niño que fue "reclutado" y permaneció en una base del ejército en Popoyán. Cuando la comunidad exigió su regreso, el comandante del ejército insistió que el niño se había alistado voluntariamente. Poco después, el niño se suicidó en la base. Este escándalo provocó que el ejército fuera más cauteloso cuando se tratara de reclutar hombres o niños indígenas en la región.

Las comunidades indígenas también desalentaron el alistamiento voluntario. Según AICO,

Si uno de nosotros desea considerar alistarse a una de los grupos armados, nosotros intentamos ofrecerles algo mejor. Quizás un poco de tierra. Trabajamos mucho con la juventud en este sentido. Necesitamos darles incentivos para permanecer en la comunidad.

Puestos del ejército en territorio indígena.

El ejército aparentemente está planeando establecer puestos que sean más permanentes en las montañas del territorio indígena en Cauca. Los líderes del CRIC se opusieron a esto, señalando que si el ejército crea la imagen de que los indígenas están de su lado, ellos se convertirían en un blanco para la guerrilla. Pero dada la escalada de la presencia paramilitar, ellos mencionaron que probablemente no puedan detenerlos, y que deben ser

prudentes. “Si protestamos demasiado abiertamente por los puestos del ejército, seremos el blanco de los paramilitares”

Estrategias contra el desplazamiento

Los grupos indígenas en Cauca no han enfrentado el desplazamiento masivo, con la excepción de las repercusiones de la Masacre del Naya en el 2001. Al igual que OREWA en Chocó, ellos consideraban el desplazamiento como el último recurso, que siempre debía ser un proceso colectivo, acompañado por denuncias y seguido de la organización de un pronto retorno.

“La María” y la importancia del Diálogo.

Nosotros fuimos muy críticos del Proceso de Paz de Pastrana, porque no había espacio real para involucrar a la sociedad civil. No participamos de las “mesas” en Caguan. En cambio, nosotros fomentamos el dialogo y la creación de alianzas en nuestro territorio.

- CRIC

La María es una reserva indígena que se extiende a ambos lados de la Autopista Panamericana en Cauca. Luego de las movilizaciones populares, los grupos indígenas decidieron consagrar La María como un espacio especial para el diálogo, en cual diferentes grupos (indígenas y no indígenas, a lo largo de Cauca y a nivel nacional) podían congregarse para fomentar la unión y buscar soluciones a los problemas y donde podían llevarse a cabo las negociaciones oficiales. El proceso fue iniciado con ceremonias indígenas especiales, ratificado por consejos indígenas, así como ratificado por medio del decreto 982 del gobierno departamental. La ubicación estratégica de *La María* en la autopista otorga a cada reunión pública allí el carácter de protesta política, con el potencial de perturbar el status quo, y su ubicación dentro del territorio indígena le otorga aparentemente un cierto nivel de protección legal y política. En el 2000, durante una reunión masiva organizada en La María, el ejército bloqueó el acceso de alimentos y agua a los que estaban reunidos. El Gobernador Floro denunció el accionar del ejército como un abuso a los derechos humanos.

Estrategias espirituales y culturales

El representante de AICO mencionó la “resistencia espiritual” señalando que los indígenas creen que si están limpios espiritualmente, como individuos y como comunidad, alcanzarán el éxito. Si no están limpios, no van a poder cuidar a los demás como tampoco a su comunidad. No obtuvimos mayores detalles respecto del mecanismo de tal resistencia.

Un representante indígena de la región de Caldonio también mencionó que los hombres de la medicina indígena poseían rituales y ceremonias que servían para proteger a la gente y provocar que las rutas o los caminos se tornaran intransitables. El impacto de estos rituales fue sugerido por un incidente en el cual la guerrilla ingresó a la aldea para encontrar al hombre de la medicina tradicional para hacer que deje de “tapar” sus rutas y este hombre de la medicina tuvo de escapar de la comunidad por un tiempo. Por lo tanto, a pesar de que los grupos armados son no-indígenas, y podrían no creer en las bases espirituales de tales practicas indígenas, estaban lo suficientemente preocupados (o temerosos de) su impacto potencial para intentar detenerlos. La persona encuestada

consideró esta estrategia como una estrategia que complementa a otras, mencionó "y luego cuando esa no funcione más, vamos a buscar otras estrategias".

Asimismo, como en Chocó, los encuestados indígenas mencionaron la importancia de mantener sus propios sistemas de justicia interna, "para que los forasteros no vengan a administrar la justicia por nosotros". Las comunidades y los individuos en todos lados sienten una gran necesidad de tener a quien acudir en busca de "justicia", y el cumplimiento de la justicia se asocia a menudo con aquellos que poseen un monopolio sobre el uso de la fuerza" Esta necesidad, en lugares donde no hay sistemas de justicia del estado, le brinda a los grupos armados en el territorio un "ingreso" a las vidas internas de las comunidades, aumentando su influencia mediante el rol de "administrador de justicia". Cuando las comunidades crean sus propios sistemas alternativos para resolver esta necesidades, ellos eliminan el espacio de influencia de todos los actores armados.

Movimientos campesinos locales:

Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con varios representantes de organizaciones de campesinos. Estas organizaciones incluyeron:

1. *ASOCOMUNAL de La Vega* (Asociación comunitaria de la municipalidad de La Vega). La membresía de asociación oficial incluye 30 grupos, cada uno contiene 5-8 familias. Sin embargo, la asociación también trabaja conjuntamente con los Consejos de Comunidad de 93 pequeñas y diferentes veredas (aldeas, secciones de barrios rurales) en la municipalidad.

2. *Grupo de Gestión Comunitaria de Tequendama* que representa a más de cincuenta familias en Tequendama.

3. *Campesino Asociación of Caldone* – formada por vínculos creados entre activistas durante la movilización regional de 1999.

4. *ANUC-UR (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción)*, un sindicato campesino nacional con miembros en varias comunidades de Cauca.

5. *FENSUAGRO (Federación Sindical de Campesinos)*, con sindicatos afiliados en las municipalidades de Mirando, Corinto, Tambio, Quintana, Patia, y Argelia.

Entre todos estos grupos, que representan los esfuerzos de docenas de comunidades, hubo un conjunto de estrategias coherentes y compartidas para defender la integridad de la comunidad y del territorio ante el conflicto. Las estrategias eran a pequeña escala y a largo plazo, basadas en un análisis en el cual la autosuficiencia representaba una objetivo fundamental ante la vulnerabilidad en un conflicto que era tanto político como económico.

Concientización/Análisis político

Todos estos grupos le dan mucha importancia a la educación de la comunidad mediante talleres, etc. para ayudar a los miembros de la comunidad a entender el conflicto y los conexión entre sustentabilidad local y vulnerabilidad a la violencia. Ofrecieron

capacitación en derechos humanos, capacitación específica para mujeres, y buscaron ayuda externa.³⁶ para facilitar talleres en análisis político. El análisis de estos grupos fue que tal educación debía diferenciarse de la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Entonces, estos grupos, en contraste al discurso de los grupos indígenas, no solían usar la frase “actores armados” en cambio especificaban a que grupo se estaban dirigiendo. Asimismo, ellos solían presentar el conflicto armado como si fuese entre dos partes - la guerrilla por un lado y el ejército/ los paramilitares por el otro, haciendo poca diferencia entre las estrategias del ejército y la de los paramilitares.

El conflicto no es por las drogas ni por la guerrilla, esos son síntomas. La concientización es un proceso desigual, por lo tanto no hay estrategias rígidas validas para todas las comunidades. En cambio, nos concentramos en fortalecer la capacidad local para desarrollar sus propias estrategias.
- ANUC-UR

Denuncias de Derechos Humanos y la conexión nacional /internacional

Todos estos grupos eran miembros de una red de derechos humanos regional (Red de derechos humanos Isaías Cifuentes) que denuncia las violaciones a los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Había, sin embargo, bastante incertidumbre acerca de la efectividad de estos esfuerzos. Estas comunidades estaban presenciando la creciente toma del poder de la región por parte de los paramilitares, a pesar de las protestas populares sobre derechos humanos a nivel nacional e internacional que han podido reunir.

El conflicto ha forzado nuevas tareas para nosotros, que antes no teníamos que hacer. Mantener contactos nacionales e internacionales, Denuncias etc. Esto insume mucho tiempo y energías. Sin embargo también necesitamos focalizaron en el trabajo local. La demanda de nuestros recursos humanos esta dividida entre las dos.

- ANUC-UR

Dicho trabajo local fue enfatizado más fuertemente en estas entrevistas:

Pasos hacia la colectivización

Estos activistas criticaban el enfoque campesino individualista, en el cual cada familia campesina peleaba su supervivencia con su pequeña parcela de tierra contra las vicisitudes del mercado y las intrusiones de los actores externos. Cada organización estaba siguiendo los pasos para crear y fortalecer los procesos colectivos locales a través de la reunión de campesinos en emprendimientos económicos y sociales.

Ellos estaban al tanto de que los procesos colectivos a largo plazo entre las comunidades indígenas o entre los Afro Colombianos en Chocó eran una fortaleza potencial ante la invasión político económica. También reconocieron que sus comunidades estaban lejos de ese nivel de unidad colectiva en términos legales, económicos o sociales.

Soberanía alimenticia

Ambos procesos el colectivo y el individual priorizaron el objetivo de autosuficiencia en la producción de alimentos y a lo que ellos se referían como "Soberanía alimenticia". Esto implicó alejarse de la exportación de granos y apartar territorio para la producción para cubrir las necesidades alimenticias propias de la comunidad. Los activistas enfatizaron que el número de variedad de cultivos ha sido reducida drásticamente en las últimas décadas, y ellos están tratando de recuperar esas variedades. Además, ante los costos de los fertilizantes y pesticidas y de la calidad reducida de la tierra, estas organizaciones estaban realizando esfuerzos para recuperar "la sabiduría de la agricultura tradicional" de los ancianos de la comunidad en relación con las prácticas de agricultura sostenible.

Se enfatizaron las estrategias de "conservación de semillas" como una necesidad para eliminar la dependencia de la comunidad de comprar las semillas de los cultivos cada año a negocios agrícolas, por en cambio regresar las versiones tradicionales de los cultivos cuyas semillas se pueden conservar y replantar el año siguiente.³⁷ Una parte significativa de la dependencia económica de los campesinos rurales en la elite de los agro-negocios gira en torno al hecho de que las cosechas "revolución verde" que se basan en semillas desarrolladas por la industria agropecuaria, sin importar lo que reclaman o las ventajas reales, a menudo no produce semillas que puedan ser replantadas. En contraste, los campesinos que utilizaban estos cultivos estaban forzados a comprar semillas nuevas cada año lo que con el transcurso del tiempo se ha convertido en uno de los motivos del endeudamiento de los campesinos. Una deuda puede ser un factor fundamental en un conflicto que gira en torno a la expropiación de territorio.

La estrategia de la soberanía alimenticia también requiere de cambios en el comportamiento. Además, transferir la tierra dedicada al cultivo para la venta por tierra para la producción alimenticia inmediata, el cambio que buscan afecta las dietas locales: la gente se ha acostumbrado a comer alimentos que no cultivan, y estos alimentos comprados no son necesariamente los mismos que ellos pueden plantar en su territorio.

Una razón fundamental detrás de la estrategia de soberanía alimenticia es de esta manera: la vulnerabilidad de los campesinos locales a ser manipulados por grupos armados y por las elites locales está estrechamente relacionada con su dependencia económica. Se refirieron a "producción como un mecanismo de defensa". Si los campesinos sintiesen que tienen la seguridad de producir sus propios alimentos, tendrían menos necesidad de responder a la tentación de los cultivos para la venta y especialmente de la coca. Estas organizaciones creen que la participación de los campesinos en los cultivos para la venta y la economía de la coca aviva el conflicto, y si ellos pueden gradualmente salir de esa dependencia ellos van a estar en una posición más fuerte para desarrollar alternativas económicas y políticas locales. "Gradual" es una palabra clave aquí: estos activistas abiertamente admitieron que sus esfuerzos era pequeños, y recién iniciados, y no hicieron afirmaciones grandilocuentes de su capacidad de alcanzar un impacto a corto plazo respecto del conflicto que los rodeaba. No obstante, mencionaron que estas estrategias los ayudarían ante las presiones económicas o los bloqueos por parte de los grupos armados.

Una segunda razón complementaria es que estas estrategias de "soberanía alimenticia" profundizan la conexión triangular entre los individuos, el territorio y la comunidad. Fortalece su sentido de "propiedad" y control, y dado que desafiar la propiedad es un objetivo deliberado de las campañas paramilitares, estas estrategias refuerzan la habilidad de ellos para defender la propiedad.

Estrategias de seguridad directa

Mientras estábamos entrevistando un líder comunitario de La Vega, recibió un llamado de teléfono móvil alertándolo del asesinato de varios jóvenes de la comunidad. En general, estos representantes comunitarios nos habían recalado que mayormente habían escapado de los ataques directos, y percibieron que la estrategia paramilitar era más suave, indirecta e insidiosa en Cauca que lo que había sido en otras regiones. Pero este ataque era un recordatorio de la necesidad de medidas de protección inmediata sumado a estrategias comunitarias a largo plazo.

Estos activistas mencionaron ciertas tácticas concretas de seguridad ante los ataques. Estas incluyeron:

- El suministros y el uso de teléfonos celulares y radios.
- El Monitoreo de las entradas y salidas de la comunidad.
- La realización de talleres focalizados en seguridad. Involucrar a los ancianos de la comunidad y aprender de ellos acerca de las estrategias de protección que funcionaron para la comunidad en las ultimas 5 décadas de conflicto.
- Compartir conocimiento dentro de la comunidad acerca de las mejores rutas de escape.

A pesar de estas ideas, estos grupos de campesinos generalmente no sentían que habían desarrollado exitosamente las estrategias de seguridad inmediata. Mencionaron que no se sentían preparados para la invasión paramilitar, aunque sabían muy bien que se estaba aproximando. Alguien mencionó que habían tenido discusiones preparatorias acerca de la posibilidad de una incursión paramilitar en su comunidad, sin embargo como tal incursión no había ocurrido todavía, ellos temían que la gente se estaba volviendo displicente. Según un líder de la asociación comunitario.

Si el Ejército ingresa al territorio y recluta a un miembro de la comunidad a la fuerza, la Junta Comunal no puede hacer mucho más que denunciarlo. Los indígenas tienen más autoridad en este sentido. Hasta pueden sancionar a los miembros que son reclutados voluntariamente. Nuestra única arma es la persuasión.

Ejemplo:

En una comunidad, cuyo nombre omitimos por razones de seguridad, un consejo comunitario que representaba a mas de 50 familias posee una estrategia organizacional que se basa en la producción alimenticia y en la colectivización. Sus estrategias de protección inmediatas incluyen mantener rutas de escape escondidas y monitorear las

entradas y las salidas. Si necesitan escapar, su estrategia de desplazamiento se subir a un lugar alto en las montañas, pero permanecer relativamente cerca de su territorio. “*Amamos nuestra vida. Permaneceremos aquí.*” También poseen estrategias para esconder alimentos y semillas.

Ellos consideran que la estrategia paramilitar esta intrínsecamente vinculada al objetivo económico de convertir a las campesinos en peones de los grandes terratenientes. Por lo tanto ellos consideran a la “soberanía alimenticia” como una estrategia de resistencia directa. Han trabajado durante seis años para recuperar los métodos agrícolas tradicionales, recuperar las semillas tradicionales, y diversificarse de la economía del cultivo único que promociona el estado.

En términos de colectivización, han trabajado fuertemente para crear una huerta comunitaria o Tul (también un concepto de la cultura indígena). “*La relación de un campesino con su parcela individual de tierra, crea un parcelización de su pensamiento ... La tierra nos une. La agricultura del monocultivo no es muy creativa y genera separación y competencia. La diversificación de nuestra agricultura también enriquece y diversifica nuestro pensamiento*”. Estos miembros comunitarios se reunieron para apartar una parcela de tierra de 22 hectáreas para dedicarla a la agricultura colectiva. Comparten los costos de mantenimiento de los cultivos en la tierra. Poseen un programa de trabajo a través del cual cada familia brinda dos días de trabajo por semana en el Tul. Toman decisiones colectivas respecto del uso de la tierra. El Tul produce alimentos para la comunidad en su conjunto, sin embargo esta específicamente orientado hacia la producción de semillas para uso futuro. El territorio posee un espacio público para animales pequeños, plantas medicinales y algunas áreas naturales protegidas.

CoSurca: La estrategia de la Cooperativa.

CoSurca es una Cooperativa Campesina del sur del Cauca, una región que ha sido extremadamente controlada por la guerrilla, y dominada por la economía basada en la coca. CoSurca esta principalmente compuesta por pequeños productores de café, que incluyen 1024 familias en 13 organizaciones locales en cuatro municipalidades. Desarrollan enérgicamente una estrategia para promocionar la sustitución de cultivo alternativa y alejar a los campesinos de la economía de la Coca. CoSurca, como los otros grupos que se describen, enfatiza la importancia de la economía local como una resistencia a ser abrumados por el conflicto, sin embargo su enfoque es bastante diferente. Según su director:

*Nuestra estrategia es dedicarnos activamente con la comunidad nacional e internacional con el objetivo de **fomentar el poder económico** de los campesinos. Con poder económico estamos en una mejor posición para negociar nuestras necesidades. Para poder hacer esto, tuvimos que encontrar nuestros mercados propios ... los Campesinos necesitan interactuar directamente con la industria agropecuaria internacional.*

La economía de la Coca es insostenible y está dañando a los campesinos. Es el peor de los desarrollos capitalistas. Estamos tratando construir una economía local sin la Coca. Estamos incentivando las discusiones comunitarias acerca de la Economía de la Coca y la necesidad de modelos

alternativos. Pero también tenemos que prepararnos para enfrentar la guerra, que está recrudeciendo.

Al mismo tiempo, estamos alentando a los miembros que cultiven sus propios alimentos. También estamos respaldando proyectos de salud. Este tipo de respaldo disminuye la tendencia hacia el desplazamiento.

Las estrategias de CoSurca incluyen:

Sustitución de cultivo alternativo: Están participando de programas de ventajas auspiciados por el gobierno, las Naciones Unidas y USAID la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que incentivan a los campesinos a abandonar la coca y plantar cultivos alternativos.

Beneficiarse de la economía de la exportación del café a la vez que se incentiva la autosuficiencia y el cultivo de los alimentos propios.

Creación de fuertes vínculos internacionales y oficiales. A diferencia de otros grupos, estos vínculos no estaban basados en los "derechos humanos" sino en la economía. Por lo tanto, CoSurca comercializa su café internacionalmente a través de la organización del trabajo justo, está creando vínculos con los vendedores de café orgánico, y mantiene buenos vínculos con las Naciones Unidas y con USAID. Claramente consideran estos vínculos como necesarios económicamente sino que además como una estrategia de protección. Por ejemplo, CoSurca se asegura de imprimir en cada caja de café que vende, los logos de las Naciones Unidas, USAID, y de los programas del estado que apoyan los proyectos de cultivo alternativo.

Fomentar el poder económico campesino a través del apoyo económico mutuo de una cooperativa. Mediante el fortalecimiento de las organizaciones locales, y la centralización de su poder colectivo a través del peso económico de la cooperativa, CoSurca se convertirá en un interlocutor más influyente para los miembros campesinos. CoSurca está siguiendo esta estrategia mediante la creación de sus propios vínculos de marketing independientes, para evitar los intermediarios que controlan las exportaciones de la mayor parte del café de Colombia.³⁸ Esto posee el potencial de incrementar significativamente la porción de ganancias que recuperan directamente los miembros de CoSurca. Sin embargo, ello implica un riesgo considerable de hacerse un enemigo en el monopolio del comercio del café, uno de los pilares de la elite económica colombiana. CoSurca ha contado con respaldo político externo para enfrentar este desafío.

El plan a 5 años de CoSurca incluye programas de mejoría del medio ambiente, inversiones para mejorar la calidad de la exportación del café, renovación de la tierra, viviendas, mejoras en la salud para sus miembros y seguridad alimenticia.

Entonces ¿qué tiene que ver esto con la guerra? Una estrategia "Co-operativa" no entra en conflicto, y sus beneficios se pueden justificar en casi todos los escenarios rurales. Aún cuando un conflicto domina el escenario rural en una base aparentemente permanente como sucede en Colombia, no es posible desenredar las estrategias de seguridad de las estrategias económicas. . Cuando CoSurca moviliza a la gente a retirarse de la coca, está haciendo frente a las estrategias de ingresos de todos los grupos armados. Cuando hace frente al monopolio del café, está enfrentando a las elites que respaldan la estrategia paramilitar. CoSurca, como en otros casos mencionados anteriormente, considera la vulnerabilidad de sus miembros ante el conflicto como las vulnerabilidades

de los campesinos a la manipulación económica y la devastación. Por lo tanto la estrategia de cooperativa es una estrategia de conflicto, con un potencial de seguridad positivo así como con riesgos de seguridad. Y tal como hemos visto en Chocó, en la medida que las comunidades alcancen el éxito en la creación de una fuerza “colectiva” caracterizada por instituciones que puedan sostener la unidad ante la adversidad, hasta este punto ellos pueden tener una capacidad mayor para resistir las amenazas externas planteadas por los grupos armados y las estrategias de guerra del estado.

Cuadro: Director de CoSurca: *Hemos ganado mayor respeto por parte de la FARC en forma gradual. Una vez, la FARC me detuvo y me exigió 10 millones de pesos de COSURCA. Negocié directamente con ellos. Les dije: “Okey, Yo les puedo dar los 10 millones siempre y cuando pueda obtener el acuerdo de 1200 miembros. Por lo tanto déjenme hablar con ellos y vemos”. Me dejaron ir.*

CIMA – ¡Atreverse a Gobernar!

CIMA es el Comité de Integración del Macizo y estuvo muy involucrado en la organización de las protestas masivas de fines de los 90s, en el Bloque Social Alternativo, y en el trabajo conjunto con el gobernador Floro para crear políticas alternativas para Cauca. Entre los encuestados en Cauca, CIMA representó y describió la estrategia de Cauca de utilizar el gobierno departamental para promover un espacio alternativo que abarque todo Cauca.³⁹

CIMA fue fundada en 1985 al sur del Cauca, una zona completamente ignorada por todos los servicios y desarrollo del estado. Está compuesta por numerosas organizaciones locales de campesinos miembro. CIMA jugó un papel clave en la coordinación de las movilizaciones masivas de las comunidades rurales en 1991, 1996 y 1999, cada una más grande que la anterior - con 46.000 personas ocupando la autopista Panamericana durante 26 días en 1999. CIMA negoció directamente con el estado luego de las movilizaciones de 1996 y 1999. CIMA describe estas movilizaciones masivas como “un espacio para organizar y fomentar la unidad y para crear propuestas en conjunto” Las comunidades y las organizaciones acamparon en la autopista Panamericana por semanas a la vez formaron vínculos y estrategias mutuas que sentaron las bases del movimiento en curso.

Además de organizar acciones masivas, CIMA ahora trabaja con líderes en 12 municipalidades del Cauca y 5 municipalidades en Mariño, y posee proyecto en curso y propuestas de políticas en las áreas de desarrollo agrícola, educación y cultura para la región. Su lema es “Vida Digna, Integración, Desarrollo propio” y se ha posicionado como una fuente de iniciativas de políticas para la región, en contraposición con los modelos para el desarrollo impuestos externamente desde el gobierno central en Bogotá.

CIMA, también posee un programa de “derechos humanos” – una necesidad ante el conflicto y una invasión paramilitar que considera a todas las formas de organización social como subversiva. Sus estrategias en este aspecto son directas: denuncias nacionales e internacionales y el constante fortalecimiento de vínculos internacionales.

La estrategia electoral

Los líderes de CIMA consideraron la elección del gobernador Floro en Cauca en el 2000 por el Bloque Social Alternativo como un cambio sustancial en la tradición del gobierno en Colombia. *“En este gobierno, las organizaciones sociales tienen más influencia”*. Ellos admiten que el gobierno de Floro no ha sido muy exitoso: El gobierno departamental ha tenido problemas financieros, ha enfrentado conflicto intensos y ha sido desautorizado o ignorado por Bogotá. Ellos reconocen que el gobierno departamental posee poco poder o control comparado con el gobierno central o el ejército. Sin embargo en contraste con las sospechas y resistencia en varias organizaciones sociales hacia el proceso de gobierno corrupto y controlado por la elite en Colombia, CIMA sostuvo: *“Apostamos a gobernar” (“Debemos atrevernos a gobernar”). “Hemos intentado. Creemos en la participación democrática. Tenemos que estar creando nuestras propias propuestas para el futuro. Es muy difícil”*.

En defensa de Floro, ellos señalan que ha sido un crítico abierto de la fumigación, y que ha intentado intervenir con respecto a los paramilitares. *“En ocasiones él ha llamado al ejército para alertarlo de la presencia de paramilitares en los alrededores e insistir que entren en acción. El ejército responde “Por supuesto”, pero cuando llegan, por supuesto que los paramilitares han sido alertados con anterioridad y no están allí”*.

CIMA reconoce que a pesar de haber ganado la elección, la invasión paramilitar exitosa coloca a toda su estrategia alternativa regional a la defensiva.

Esto es muy difícil actualmente. La estrategia paramilitar destruye la estructura social. Existe mucho temor. Por lo tanto nuestro objetivo es mantener nuestra fuerza organizacional a través de proyectos y propuestas. Tenemos que fortalecer a esas comunidades con capacidad para resistir – y crear modelos que sobrevivan. Por ejemplo, la comunidad en San Sebastian está lo suficientemente organizada para dialogar directamente con la guerrilla.⁴⁰ Algunas han sufrido amenazas. Otras han podido resistir. Mantener la organización en el medio del conflicto es extremadamente difícil. Insistimos en una estrategia de negociación para la guerra, sin embargo la negociación tiene que involucrar a la sociedad civil, y esa sociedad civil debe estar fortalecida para participar.

También priorizamos la formación de alianzas: con grupos indígenas y otras organizaciones. Hemos creado una “Propuesta para el Desarrollo y la Paz” conjunta, que se comunicará públicamente en agosto. Creemos que nuestra experiencia combinada aquí en Cauca es relevante para la búsqueda de soluciones nacionales.

“Sur Colombiano” es un esfuerzo regional que une a Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, y el Valle de Cauca. Un aspecto une a los gobernadores. Otra parte une a la sociedad civil. Estamos trabajando hacia el consenso respecto de propuestas para toda la región. Al sur de la región existe un acuerdo amplio de que la solución debe ser política, que las regiones deben ser escuchadas, y que se deben atender las necesidades sociales.

Por último, nos dedicamos a la colaboración a nivel nacional. En Septiembre nos reuniremos con gente de Mogotes ⁴¹ y otras prácticas en otras regiones para compartir experiencias acerca de cómo los grupos han mantenido los espacios sociales dentro del conflicto.

Es difícil juzgar las perspectivas de éxito futuro de la estrategia para crear un espacio alternativo en Cauca en base a las movilizaciones masivas, la creación de alianzas y el compromiso electoral tal como lo articula CIMA. Al momento de nuestro estudio el proceso estaba claramente a la defensiva. Sin embargo, la creación de alianzas nacionales y regionales y la movilización sean el suplemento necesario para las estrategias a nivel de la comunidad local intentando proteger su territorio de la guerra. Siempre y cuando tales luchas de las comunidad sean pequeñas, escasas y aisladas, es probable que no sobrevivan ante un conflicto en el cual los paramilitares, el ejército y las elites tienen estrategias militares y políticas para controlar el territorio a nivel nacional y a largo plazo.

Discusión: Defensa Territorial en Cauca

Cauca es variada y pluralista, con muchas clases diferentes de espacios culturales y políticos locales y regionales. Estos son en cierta medida complementarios o superpuestos, y en cierta medida de tensión. Los indígenas tienen estrategias de protección ancestrales, reforzados con la creación legal de las reservas, espacios territoriales cuya autonomía es anterior al conflicto. Las otras estrategias a nivel comunitario o regional son más recientes en su desarrollo, y están generando nuevos conceptos territoriales. La incursión paramilitar que comenzó en el 2000 fue un escenario muy importante para el cambio, el que ha tenido efectos desiguales en estos procesos organizacionales. Las estrategias indígenas se han visto menos afectadas. Los movimientos campesinos se vieron bastante desequilibrados.

Todas estas iniciativas tienen una perspectiva regional (Cauca) así como conexión local a su territorio o tierra inmediatas - una conexión que es una parte fundamental de la identidad de ambos pueblos, los indígenas y los campesinos. Y ellos relacionan estrechamente los conceptos de defensa territorial con la de soberanía alimenticia. El nivel de integración regional, sin embargo, es bastante bajo. CRIC une a la mayoría de las reservas indígenas y CIMA ha tenido amplia influencia entre los campesinos, sin embargo numerosas comunidades y organizaciones no poseen relación directa con tales grandes organizaciones.

Un nuevo desarrollo importante es que Cauca actualmente ha sido elegida por la Comunidad Europea para hospedar la instalación del llamado “Laboratorio de la Paz” entre el 2004 y el 2007. Esto significará una inversión importante en el desarrollo de proyectos manifiestamente destinados a tratar las causas del conflicto, y un interés diplomático considerable en que Cauca mantenga la imagen de ser un “espacio alternativo”. Sin embargo, en otros de estos “Laboratorios de Paz” más notablemente en la región Magdalena Medio, estas inversiones de desarrollo parecen coincidir con un marcado aumento en el control paramilitar de la región. De todos modos, esta elección por parte de la Unión Europea implica que “el factor internacional” va a jugar un rol sustancialmente más importante en Cauca mientras el conflicto se desarrolla. Sería

instructivo volver a leer este análisis en unos pocos años para ver como han progresado todos estos procesos.

Es importante tratar de poner estas estrategias de resistencia en perspectiva, dada la intensidad del conflicto. Cada uno de los actores armados apunta a tener el control (hegemónico) económico y político de un territorio específico. Un requisito para ello es primero tomar control militar de este territorio. Alcanzar esta hegemonía es un proceso de múltiples etapas frecuentemente:

I. Etapa de disputa territorial: Nadie mantiene un control militar decisivo del territorio. Dos o más actores armados permanecen en el territorio simultáneamente, y hay combate.

II. Consolidación de la hegemonía militar. El territorio es dominado principalmente por la presencia de un actor armado hegemónico, con base estable. Presencias breves esporádicas de actores armados oponentes, pero el último no puede reclamar el control de bastantes partes del territorio. El combate se reduce significativamente.

III. Consolidación económica social y política: el actor armado hegemónico puede asegurarse la colaboración de la población territorial en torno a objetivos sociales, económicos y políticos específicos. No hay combate, y un menor énfasis en las actividades y requerimientos militares. Pueden presentarse ataques selectivos contra individuos o entidades que se oponen al actor hegemónico.

La progresión de la secuencia lógica es de I a II a II, sin embargo en cualquier momento un actor armado puede volver de II a I (debido a la presión militar de otro actor armado) y de III a II. También puede ocurrir que no haya etapa I o II, pero debido a la falta de enfrentamiento con un opositor, el actor armado espera conseguir el control económico y social.

Si aplicamos estas etapas en el conflicto de Cauca, podemos ver que las estrategias de protección en torno a la soberanía alimenticia son adecuadas para la etapa III, sin embargo puede que no sean tan útiles en las etapas I y II. En nuestras entrevistas hemos notado que las entidades en Cauca no han desarrollado estrategias consistentes para las etapas I y II del conflicto, sin embargo se están preparando para resistir un eventual etapa III. Este es un proceso delicado, porque las etapas I y II exigen que se dedique mucha energía a estrategias puramente defensivas, mientras que la estrategia de ellos para la etapa III requiere de inversión en proyectos construcción a largo plazo: ambas, la construcción de la capacidad de "soberanía alimenticia" agrícola así como la construcción social de la unidad de la comunidad. Y, como hemos visto en Chocó, la unidad, coherencia y organización comunitaria es una de los objetivos directos de la estrategia militar. El desafío de aquí en adelante para estas comunidades del Cauca es ahora resistir esas presiones mientras que se fortalecen para más adelante.

Cuarta Parte: Conclusión

Colombia ha sufrido medio siglo de conflicto interrumpido, que desde fines de los 90s se ha recrudecido a uno de sus peores periodos. El país tiene algunos problemas

económicos y estructurales verdaderamente complicados que han facilitado el conflicto y que mantiene las estrategias armadas. Sin embargo Colombia no puede ser considerada por el mundo exterior como un caso sin esperanzas. No es un estado fracasado, ni es un desorden caótico. En realidad hay tradiciones poderosas de resistencia comunitaria sin violencia y una valiente organización social. Uno de los mayores impedimentos para la búsqueda de la paz en Colombia ha sido la realidad de que el conflicto continuado resultaba efectivo para los intereses económicos de los actores armados - todos ellos. La negociación de un final para el conflicto, por lo tanto, es poco probable que resulte exitosa mientras los intereses de las partes armadas sean los únicos intereses en la mesa de negociación. En otros conflictos latinoamericanos, este equilibrio ha cambiado cuando la agenda de la sociedad civil ganó suficiente fuerza para convertirse en un factor importante en el escenario de negociación. Para que esto ocurra, se necesita ante todo un fuerte sentido comunitario, regional y nacional organizando la paz dentro de la sociedad civil. Asimismo se necesita ser aliados poderosos de quien pueda ayudar a influenciar la agenda civil en la mesa – y estos aliados incluyen la comunidad internacional y las iglesias.

Los experimentos como los que se delinear en este trabajo están colaborando con la construcción de tales alianzas, y se ubican en una trama más amplia de esfuerzos políticos y comunitarios en toda Colombia, conducida por civiles que no han perdido la esperanza. Están desarrollando alianzas internacionales más sólidas. Desafortunadamente, la jerarquía de la Iglesia Católica en Colombia todavía tiene que cumplir con el rol potencial que podría tener en este proceso. Sin embargo los grupos asociados a la Iglesia como Justicia y Paz y muchos otros están tomando las oportunidades que pueden para alentar los esfuerzos comunitarios - tanto los experimentos comunitarios individuales que resisten la guerra así como los de fomento de alianzas comunitarias.

Colombia no es un lugar sencillo para predecir el futuro. Cualquiera de estos experimentos podría ser desacreditado o aplastado. Pero el número creciente de tales intentos en esas comunidades y en otras que no hemos descrito sugieren el potencial de un desarrollo de estrategia a nivel nacional. Si los Afrocolombianos pueden aferrarse a los títulos de propiedad colectiva ante la poderosa oposición multinacional y paramilitar, hay esperanza. Cuando el general militar más poderoso en el país tiene que dedicar una conferencia de prensa para deslegitimizar un experimento comunitario en Cacarica, y los paramilitares continúan hostigándolos sin razón militar, ellos están sugiriendo que estos experimentos simbólicos hacen que su proyecto armado sea vulnerable. Cuando un grupo guerrillero tiene que entregar un rehén a una comunidad indígena desarmada que los rodea, ellos también están demostrando una vulnerabilidad al poder civil. Cuando los campesinos del Cauca o de Chocó pueden rehusarse a plantar coca e insisten en cultivar sus propios alimentos, ellos están desarrollando una base de poder independiente, porque la autosuficiencia es poder. Y si tales ejemplos pueden inspirar a otros colombianos a que tengan esperanza de que ellos también pueden encontrar formas creativas de sobrevivir al conflicto con dignidad entonces su supervivencia, su poder y su dignidad van a terminar con la guerra.

Anexo 1: Informe de Amnesty International sobre Colombia (a continuación)

Anexo 2 - mapas (documento por separado)

Anexo 1: Extracto de Amnesty International sobre Colombia, 2003

(Extraído de la Memoria Anual 2003 AI. ⁴²)

REPUBLICA DE COLOMBIA

Jefe de Estado y Gobierno: Álvaro Uribe Vélez (reemplazado por Andrés Pastrana en agosto 2002)

Tribunal Criminal Internacional: ratificado

Antecedentes acerca del conflicto

Las conversaciones de paz se iniciaron en 1999 entre el gobierno y grupo armado principal de la oposición, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que colapsaron el 20 de febrero. Los intentos para iniciar negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se habían estancado para fines de año. El conflicto armado entre las fuerzas de seguridad, actuando conjuntamente con grupos paramilitares, y grupos guerrilleros, se intensificaron y luego se interrumpieron las conversaciones de paz con la FARC.

Esto resultó en un marcado deterioro en la situación de recursos humanos. Más de 500 personas “desaparecieron” y más de 4.000 civiles fueron asesinados por motivos políticos. El desplazamiento forzado interno continuó incrementándose dramáticamente. Más de 2.700 personas fueron secuestradas, al menos 1.500 de las cuales fueron rescatadas por los grupos guerrilleros y grupos paramilitares. Este ciclo de violencia política fue exacerbado por las políticas de seguridad del nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez que asumió en agosto. Las principales víctimas de las violaciones a los recursos humanos y a la ley humanitaria internacional continúa siendo la población civil, que incluye los campesinos desplazados internamente y miembros de las comunidades indígenas y Afro Colombianas que viven en las zonas de conflicto. El grupo paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declararon un alto al fuego unilateral el 1 de diciembre y en el mismo mes el gobierno anunció su intención de iniciar negociaciones con los paramilitares respaldados por el ejército. Había preocupación de que las medidas del gobierno para facilitar las negociaciones con grupos combatientes ilegales e iniciativas legislativas de gobierno podrían resultar en impunidad para los miembros de los grupos paramilitares, las fuerzas armadas o los guerrilleros responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros crímenes según la Ley Internacional.

Estado de emergencia y legislación de seguridad

El 25 de Noviembre, el Tribunal Constitucional declaró que las partes del Decreto 2002 eran inconstitucionales, principalmente aquellas partes que le otorgan poderes de policía judicial para los militares. El gobierno afirmó que deseaba hacer permanentes algunas de las provisiones contenidas en el estado de emergencia y en el Decreto 2002. El gobierno anunció que iba a presentar propuestas legislativas al Congreso en el 2003 para otorgar poderes de policía judicial a las fuerzas de seguridad después que las reformas propuestas que permitían al Fiscal General del Estado otorgar tales poderes a las fuerzas de seguridad fueran bloqueadas en el Congreso en diciembre. Las autoridades anunciaron la creación de un red de un millón de civiles informantes, que se esperaba asistieran a las fuerzas de seguridad en su estrategia de contrainsurgencia, y comenzaron a reclutar “soldados campesinos” que vivirían dentro de su propia comunidad. Había preocupación de que esta situación arrastraría a la población civil aún más en el conflicto y fortalecería a los paramilitares.

Grupos de oposición armados

Los grupos de oposición armados fueron responsables de las numerosas y repetidas violaciones de la ley humanitaria internacional, que incluye la toma de rehenes y el asesinato de civiles. En Mayo, la FARC lanzó una amenaza de "renuncia o muerte" a los jueves, alcaldes y consejeros locales. Luego la FARC asesinó a varios oficiales locales y civiles que acusaban de colaborar con sus opositores. La FARC llevó a acabo numerosos ataques desproporcionados e indiscriminados que resultaron en la muerte y lesiones a muchos civiles.

Fuerzas Armadas

Existían informes acerca de la participación directa por parte de las fuerzas de seguridad en serias violaciones a los derechos humanos, que incluyen arrestos arbitrarios, tortura, "desapariciones" y asesinatos.

Paramilitares

Los grupos paramilitares continuaron expandiéndose y consolidaron su presencia en el país, especialmente en las áreas con mayor presencia militar. Los paramilitares que operaban en complicidad con las fuerzas de seguridad fueron responsables de la gran mayoría de "desapariciones" y asesinatos de civiles.

Persecución de los defensores de derechos humanos

Bajo el nuevo gobierno, los activistas de derechos humanos eran asesinados, "desaparecidos", detenidos, amenazados u hostigados. Mientras expresaba un interés de mantener el dialogo con las organizaciones no gubernamentales, en la practica los oficiales y algunos sectores de los medios de comunicaciones frecuentemente trataban a los defensores de derechos humanos como subversivos, y los convertían en blanco durante las operaciones de espionaje y contrainsurgencia.

Las restricciones de movimiento oficiales y no oficiales significaba que los defensores de derechos humanos no siempre podían tener acceso a las áreas donde se informaba habían ocurrido violaciones a los derechos humanos. Algunos activistas, periodistas y trabajadores humanitarios fueron interrogados o detenidos arbitrariamente durante los intentos de alcanzar a las personas en las zonas de conflicto que quedaron incomunicadas con el resto del país. Durante asaltos llevados a cabo en las así llamadas operaciones de inteligencia y contrainsurgencia, los detalles personales individuales y la información valiosa en relación con la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en violaciones a los derechos humanos fueron tomadas de las organizaciones sociales. Los activistas de derechos humanos de todos los sectores de la sociedad se convirtieron en el blanco. Hacia fines de ese año, se informó el asesinato de 170 sindicales de comercio, la mayoría por parte de los paramilitares. Varios líderes indígenas y periodistas también fueron asesinados.

Civiles en las zonas de conflicto

Agricultores campesinos, Afro Colombianos y comunidades indígenas que viven en las zonas de conflicto o áreas de interés económico continuaron siendo las víctimas principales de las violaciones a los derechos humanos o a la ley humanitaria internacional perpetradas por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares y por las fuerzas guerrilleras. Más de 350.000 personas fueron desplazadas internamente en los primeros nueve meses del año como resultado de amenazas y asesinatos de civiles perpetrados por ambas lados del conflicto.

Organizaciones Intergubernamentales

La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos nuevamente condenó el grave y persistente incumplimiento de la ley humanitaria internacional cometido principalmente por los paramilitares y la guerrilla. Asimismo ha condenado la persistencia de la impunidad y expresó su preocupación por los vínculos entre las fuerzas armadas y los paramilitares. El Alto Comisario para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó que los tribunales militares lanzaron o continuaron con las investigaciones de violaciones de derechos humanos a pesar de las recomendaciones de las autoridades colombianas para asegurar que todos los casos de violaciones de derechos humanos e incumplimientos de la ley humanitaria internacional debían ser excluidos de las tribunales militares.